CARLOS BALL

GRAN LIBERAL VENEZOLANO

Recopilación de artículos y discursos

Por Diego Mendoza

Un libro de:

la ventana ROTA

Táchira - Venezuela, 11 de enero de 2024

Dedicatoria

Este breve trabajo está dedicado a todos los jóvenes de Venezuela que sienten interés por entender cuáles fueron las causas que llevaron al país a las actuales circunstancias, y que esperan poder contribuir, como dice el maestro Alberto Benegas Lynch, a correr el eje del debate para procurar una sociedad libre donde el respeto al prójimo sea la cotidianidad de los venezolanos.

la ventana ROTA

Agradecimientos

Este libro ha sido posible puesto que instituciones como el Instituto Cato y CEDICE Libertad se han tomado la tarea de mantener en sus páginas web varios de los artículos y discursos del señor Carlos Ball. Esta labor de recolección y publicación, ha permitido que nuevas generaciones conozcamos sus ideas, a ustedes: ¡Gracias!

la ventana ROTA

Un libro en homenaje a Carlos Ball

Índice

PREFACIO	6
INTRODUCCIÓN	7
ARTÍCULOS	10
LA DEMOCRACIA ECONÓMICA	11
DONDE EL GOBIERNO METE LA MANO HAY INEFICIENCIA Y ESCASEZ	13
LIBRE COMERCIO VERSUS PROTECCIONISMO	16
CENTENARIO DE HAYEK	18
DERECHOS Y MÁS DERECHOS	21
REGULACIÓN VERSUS LIBERTAD	23
INMIGRACIÓN: ¿A FAVOR O EN CONTRA?	25
EL FRAUDE DE LA "JUSTICIA SOCIAL"	27
EL EMPOBRECIMIENTO DE AMÉRICA LATINA	29
MÁS ESTADO SIGNIFICA MÁS POBREZA	31
CARIDAD CON DINERO AJENO	33
LA INCOMPATIBILIDAD DEL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD	35
UN ROBO LEGALIZADO	37
DISCURSOS	39
REGULACIÓN VERSUS LIBERTAD	40
LIBERTAD ECONÓMICA	52
¿POR QUÉ AMÉRICA LATINA NO PROGRESA EN UN MUNDO DONDE OTROS LO ESTÁN LOGRANDO?	62

Prefacio:

Esta obra procura transmitir a partir de la recopilación de varios de los artículos y discursos de Carlos Ball, el valor de la libertad individual, para que se convierta en la norma bajo la cual poder vivir, convencidos que es el respeto al prójimo la única receta para mejorar los niveles de vida, puesto que al permitir que las personas persigan sus fines, estas, por lo general, en la búsqueda de beneficios, producen y ofrecen un mayor número de bienes y servicios empleando el menor número de los siempre escasos recursos, permitiendo de esta manera que más personas tengan accesos a las cosas que desean para satisfacer sus necesidades.

Al mismo tiempo, es un libro con el cual se busca mostrar a los venezolanos que en el país han existido personas que abrazaron las ideas del liberalismo y procuraron en todo momento su defensa y difusión. La tarea a la que se abocó Ball, fue la de intentar hacer entender a los políticos, y a sus compatriotas en general, que el camino que se estaba transitando era el equivocado, el cual había llevado a diferentes países, sin importar el hemisferio, a desmejorar la calidad de vida y entorpecer el progreso. Por infortunio, los consejos que transmitía a través de la prensa escrita de la época y de los discursos que brindaba en las asociaciones de profesionales, fueron desoídos por la mayoría.

Sírvase pues este trabajo para nuevamente avivar sus palabras y poner sobre la mesa sus posturas en torno a temas como el libre mercado, la intervención estatal, el tamaño del estado y sus funciones, las leyes laborales, la política monetaria y demás, que tienen suma importancia y actualidad en Venezuela y América Latina.

Introducción:

CARLOS BALL, FARO PARA LA LIBERTAD

Por Diego Mendoza

Decidido a defender las ideas en las que creía, las cuales procuran la libertad individual, este insigne venezolano fue un liberal en esencia que se esmeró por sembrar luces pese a los desafíos del camino.

Carlos Ball, nacido en Caracas en 1939, fue un periodista autor de innumerables artículos en los que exponía con firmeza su postura respecto a la realidad del país. No vacilaba al momento de señalar lo que consideraba, eran terribles errores políticos que podrían conllevar a que los ciudadanos enfrentasen una situación peor a la que se intentaba remediar.

No sería descabellado sugerir que sentía profundo rechazo y desconfianza por el estado, aunque lo consideraba un mal necesario que debía ser maniatado para que se dedicara únicamente a las labores de brindar los servicios de justicia y seguridad. Todo lo demás, creía con sólidos argumentos, se debía dejar en manos de la iniciativa privada.

Estas acotaciones solían ser impopulares en la Venezuela de la época, donde imperaba el discurso de actores políticos que sostenían que el país era infinitamente rico, y lo único que se debía hacer era abocarse a repartir dicha riqueza de manera equitativa, o invertirla en áreas de desarrollo pensadas por un grupo de ilustres “prohombres”.

Similar al premio nobel, Friedrich A. von Hayek, a Ball también le disgustaba esa “fatal arrogancia” que poseían varios de los dirigentes políticos de entonces. Para él, la gente no necesitaba un guía o grupo de guías que desde un comité central les planificara la vida, decidiendo sobre las valoraciones y preferencias temporales de cada uno. En cambio, creía que cada individuo, en plenas capacidades mentales, tenía no solamente la capacidad de hacerse cargo de sí mismo, sino que ese deseo era inherente a la naturaleza misma de la raza humana, y, por consiguiente, inalienable.

Y por supuesto, fiel a esta lógica, se negaba rotundamente a las regulaciones que entorpecían los intercambios voluntarios y distorsionan el complejo proceso de mercado, en el cual las

personas libremente transan con sus títulos de propiedad para satisfacer las siempre presentes necesidades.

Todo ello demostraba el respeto que sentía por la propiedad, titulando sin duda a los impuestos como un saqueo, y al derecho constitucional a la expropiación como un robo. Bien reconocía Ball, como lo han hecho los liberales que tanto citaba, que el respeto a la propiedad es la piedra angular que hace avanzar la civilización en concordia, incentivando al trabajo, el ahorro y la inversión.

Por esta misma razón, se oponía a la coerción legal para favorecer a pseudoempresarios, personas que como señalaba muchas veces, odian la competencia y buscan vivir bajo el amparo del estado, ofreciendo al consumidor bienes y servicios de menor calidad y a un mayor precio.

De manera tal, que su concepto de libertad era bastante amplio, llegando en cierta ocasión, incluso, a oponerse a la exigencia del uso del cinturón de seguridad en los vehículos, puesto que consideraba que ello debía estar a conciencia de cada persona.

Sus posturas y críticas llegaron a ser tan odiadas por los políticos de turno, que manifestó que el despido como director de Diario Caracas se debió a una amenaza hecha directamente por un alto funcionario a los dueños del medio de comunicación.

Con todo y ello, Carlos Ball nunca se doblegó, siendo miembro fundador del Centro de Difusión del Conocimiento Económico (CEDICE Libertad), presidente de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), contribuyente en la formación del Instituto Cato, y conferencista. Desde cada tribuna, desde cada espacio mínimo dejado por el estado, se esmeró por sembrar una semilla sin tener la certeza de que caía en terreno fértil.

Esa semilla era el liberalismo, pero no ese credo de un partido político, sino el liberalismo como conjunto abierto de ideas cuya máxima es el respeto al prójimo para vivir en libertad. Por esta misma razón fue que Ball en simples artículos de prensa mencionaba a Adam Smith, Juan Bautista Alberdi, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, James Buchanan, Frédéric Bastiat, Milton Friedman, entre otros, porque creía que estos autores tenían una manera diferente de ver las cosas, una que en el mundo, y sobre todo en América Latina, es poco común, una en la que el estado no es la estructura para hacerse rico, dañar a otros o crear "derechos", sino que funciona enmarcado en normas de una cultura de gente abocada a ser libre.

Ahora, a más de una década de su partida, sus escritos siguen siendo lecciones importantes a considerar. Una lectura a parte de sus artículos y discursos, permiten hacerse con una postura distinta respecto a diferentes temas políticos y económicos, lo cual enriquece el debate, y deja ver que en Venezuela han existido prominentes liberales. Su vida se apagó en julio de 2014.

Sirva esta colección seleccionada de algunos de sus trabajos para enseñar su obra, exaltarla y motivar a poner en práctica los principios más fundamentales para vivir en la libertad que se preocupó por enseñar y defender.

la ventana ROTA

Artículos

La democracia económica

por Carlos Ball

la ventana

Por encima del ruido de políticos y manifestantes en Quebec, nos conviene estudiar cuáles son las verdaderas causas de la riqueza y de la miseria de las naciones. Estados Unidos lo ha hecho bastante bien por más de dos siglos, mientras que del resto de las Américas no podemos decir lo mismo. Me encantaría asegurar que la democracia hace la diferencia, pero no es así. En América Latina hemos elegido democráticamente a gente de la calaña de Juan Domingo Perón, Salvador Allende, Alan García y Hugo Chávez, quienes rápidamente se dedicaron a destruir lo que encontraron.

Por otra parte, ni en Hong Kong ni en Singapur la gente ha gozado de mucha democracia, pero sí de inmensa libertad económica, a la vez que de igualdad ante la ley. No gozan de recursos naturales, por lo cual los gobiernos no son presionados a "redistribuir" la riqueza y entonces los impuestos son muy bajos.

Si la democracia política no es necesariamente el camino al bienestar es tiempo que comencemos a buscar ese buen camino por vía de la democracia económica. Después de todo, votamos en elecciones cada dos, cuatro o seis años, pero votamos en el mercado todos los días, decidiendo qué nos conviene comprar, cuáles son las prioridades económicas de nuestras familias, cuánto nos conviene ahorrar y cómo vamos a financiar las inversiones mayores, como el auto, la casa y la educación de los hijos. Indudablemente que, a nivel personal, estas son decisiones mucho más importantes que la de por quién votar para la alcaldía de la ciudad o la presidencia del país.

Es indudable que los estadounidenses han tenido mucha más libertad económica que los latinoamericanos. No siempre fue así. Argentina a principios del siglo XX y Venezuela a mediados del siglo gozaron de amplia libertad económica, lo cual atrajo a los otros ingredientes necesarios para el crecimiento y bienestar: inversiones y capital humano (inmigración).

Con frecuencia oímos hablar de la importancia de las inversiones para incrementar el nivel de vida de la ciudadanía. Pero mejor termómetro aún parecen ser los flujos de inmigrantes.

Los países que atraen a inmigrantes son aquellos donde hay movilidad social, donde el esfuerzo y el trabajo son premiados en lugar de entorpecidos por complicadas tramitaciones y regulaciones oficiales, donde los impuestos son relativamente bajos, la moneda es sana y la elite dominante no consiste en una cerrada cleptocracia. Hoy estamos viendo a colombianos, argentinos y venezolanos emigrar a Estados Unidos, como lo hicieron los cubanos en los años 60 y los centroamericanos en tiempos del sandinismo y demás guerrillas marxistas.

Alrededor de un tercio de los empleados de las empresas de alta tecnología del Valle Silicón son extranjeros y un número significativo de esas mismas empresas es dirigido por hindúes, gente educada y competente que no tenía futuro en su país debido al socialismo y a la imposibilidad de conseguir financiamiento para lanzar algún novedoso producto o servicio.

El brillante economista Reuven Brenner acaba de publicar un libro titulado "El siglo financiero" ("The Financial Century", Stoddart Publishing Co., 2001). Allí insiste que la clave para la prosperidad en el siglo XXI es lograr la unión del talento con el capital y que ambas partes estén obligadas a rendir cuentas. En los países con mercados abiertos de capital, ese emparejamiento del genio creativo empresarial con el financiamiento requerido se logra a través de una gran variedad de instituciones financieras que dependen para su crecimiento y supervivencia en apoyar proyectos exitosos.

Pero cuando los mercados de capital son cerrados y poco democráticos, son los burócratas quienes deciden a dónde van los reales. El problema es que entonces se trata de decisiones políticas, divorciadas del mercado, y el burócrata sale ganando no cuando triunfa el proyecto sino cuando es reelegido su padrino político. Los bancos estatales no quiebran, pero las empresas financieras privadas que se equivocan pronto desaparecen.

Brenner, quien nació en Rumania, estudió en Israel y es profesor de la Universidad McGill en Montreal, dice que la opción para la gente que vive en países con mercados de capital cerrados es emigrar. Desde la caída del comunismo más y más personas lo hacen, por lo que la migración se ha convertido en el verdadero corazón de la globalización, definida por Brenner como el "más fácil y más rápido movimiento de gente, capital e ideas".

Así vemos que el gran éxito de Estados Unidos es haber creado una sociedad que atrae al talento de todo el mundo porque cualquiera con energía, buenas ideas y habilidades tiene aquí acceso a recursos financieros, mientras que en sus países de origen ello dependía de nexos familiares o políticos. Brenner no cree que una buena Constitución y el derecho al voto conducen necesariamente a la prosperidad. Pero los mercados abiertos de capital sí conducen automáticamente al bienestar y al crecimiento económico.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 27 de abril de 2001. © Todos los derechos reservados.

Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

la ventana
ROTA

Donde el gobierno mete la mano hay ineficiencia y escasez

por Carlos Ball

Hay sólo dos sistemas de intercambio de bienes y servicios: libre mercado o reglamentación gubernamental. En el mercado, la libre oferta y demanda establecen los precios y las cantidades. Bajo el sistema socialista, son los gobiernos y sus burócratas quienes fijan los precios y por lo tanto, las cantidades. A los políticos les gusta regalar lo que no es suyo y luego se asombran cuando la demanda por regalías se hace infinita, lo cual pronto se transforma en cuotas, colas, escasez y corrupción.

El crecimiento y bienestar de los países dependen fundamentalmente del grado de libertad que goza el ciudadano en sus decisiones cotidianas. A mayor intervención oficial, mientras más decisiones toman los burócratas, mayor será la ineficiencia de la economía, la cual deja de producir los bienes y servicios que la gente quiere, dándosele prioridad al plan político. En esto poco influye la buena o mala intención del mandatario. El funcionario encargado del agua o de la electricidad o del transporte público o de la educación no tiene manera de conocer los deseos y requerimientos de millones de individuos con planes familiares diferentes. Recordemos también que los incentivos del funcionario son totalmente diferentes. Las prioridades del burócrata son ganarse el apoyo de los activistas, inflar el problema para lograr mayor presupuesto y asegurar la reelección de su padrino político, cueste lo que cueste.

Los incentivos en el sector privado son otros. Para progresar hay que aumentar las ventas y las utilidades y ello se logra sólo ofreciendo mejor precio y mejor calidad que la competencia. Pero todo ello también depende del grado de libertad que haya en el mercado. Si hay poca libertad, al empresario le resulta más rentable dedicar la mayor parte de sus esfuerzos en cultivar a sus amigos políticos para obtener subsidios o para que impidan el ingreso de competidores. Así se le da la espalda al mercado para hundirse en el mercantilismo, sistema intermedio que predomina en América Latina. Entonces sufrimos de altos aranceles para "proteger la industria nacional", altos precios, poca variedad y mala calidad.

Basta que el gobierno interfiera en el mercado, reduciendo la libertad individual, para que haya ineficiencia y aumenten los costos, aunque esto último a menudo se esconda financiándolos a través de impuestos, en vez de por el pago directo que el consumidor desembolsa.

Los burócratas siempre tendrán estupendas excusas para tratar de esconder su propia ineficiencia. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted a un empresario quejarse alguna vez de exceso de clientela? Claro que no. Pero siempre resulta que hay demasiados estudiantes en las escuelas públicas, demasiados viajeros en los aeropuertos, demasiados autos en las autopistas, demasiada gente regando su grama. El problema es que en las escuelas, los aeropuertos, carreteras y acueductos no se permite que el mercado funcione, por lo que siempre habrá excesiva capacidad instalada e insuficiencia de usuarios o -el caso más probable- insuficiente oferta y mala calidad del servicio.

Lo más triste es que los políticos y funcionarios utilizan la fuerza del gobierno para cerrarle las puertas a la libre iniciativa justo en aquellos servicios que consideran imprescindibles, como la educación. Imaginemos por un instante cómo habría avanzado la educación primaria y secundaria de no haber sido durante todo el siglo XX un coto cerrado a la iniciativa privada, donde a genios que han revolucionado otros campos, como la computación y las comunicaciones, jamás se les permitió entrar a competir, ya que es imposible competir en algo que se anuncia como gratuito.

Así vemos que las escuelas del gobierno son hoy mucho peores de lo que eran cuando yo estaba en cuarto grado. A la escuela se iba a aprender, no a entretenerse. A los maestros se les respetaba y había una estricta disciplina en cuanto al comportamiento y la apariencia física de los muchachos. Los malandrines se tenían que vestir de gente para ir a clases. ¿Drogas, armas? Yo estuve en un internado que expulsaba a quienes fumaban cigarrillos. El fracaso de la educación pública es una de las peores tragedias sufridas por las últimas generaciones. Claro que los socialistas no lo ven así; ellos han utilizado esas escuelas para inculcarle a la juventud un inmerecido respeto hacia el estado y absoluto desprecio hacia el lucro.

En California, los activistas verdes aliados con funcionarios del gobierno estatal han impedido que se construyan plantas eléctricas en los últimos diez años, mientras la población y la economía crecían como nunca antes. Ahora, los apagones resultan ser la culpa de las empresas privadas de electricidad y la solución política es nacionalizar el cableado de alta tensión.

Aquí en Florida, los comisarios del agua multan a los consumidores y se preocupan más por la falta de agua en los pantanos que para regar los campos de golf. Yo no juego golf, pero le tengo más simpatía a mi vecino que a las culebras y a los caimanes. Por su parte, empresarios privados se recuestan del gobierno, pidiendo descaradamente dinero de los impuestos para financiar sus estadios.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 06 de abril de 2001. © Todos los derechos reservados.
Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

Libre comercio versus proteccionismo

por Carlos Ball

Pocas medidas gubernamentales le hacen más daño a la gente que la politización de las decisiones económicas, al impedir que el mercado funcione. Es decir, no permitir que los ciudadanos tomemos libremente nuestras propias decisiones económicas es uno de los mayores daños que los políticos nos hacen. Por ello es sorprendente que en las actuales discusiones en el Congreso de Estados Unidos sobre las relaciones económicas con China y en los reportajes de la prensa se tienda a dejar fuera la razón principal para eliminar las trabas oficiales: el libre intercambio le conviene tanto a los estadounidenses como a los chinos.

No pongo en duda las buenas intenciones de los abanderados de derechos humanos que se oponen a que Estados Unidos conceda "relaciones comerciales normales y permanentes" a China. Ellos piensan que la examinación y renovación anual de las relaciones comerciales -como se ha venido haciendo desde 1979- les da un arma para presionar a las autoridades comunistas para que traten mejor a los disidentes y a grupos religiosos que no comulgan con el comunismo. Pero, en realidad, el camino más rápido hacia la democracia es que la gente común y corriente pueda pensar sobre otra cosa que comer completo cada día. En este sentido, el emergente capitalismo en China está creando una creciente clase media, cada día más independiente de los políticos comunistas y más en onda con la globalización. Pero, en Estados Unidos, líderes sindicales y empresarios proteccionistas utilizan los bonitos argumentos de los derechos humanos, aunque lo que realmente les interesa es mantener sus ventajas y privilegios a costa del consumidor.

Por otra parte, quienes se atemorizan del déficit comercial con China no quieren darse cuenta que lo que beneficia al país no es lo que exportamos sino lo que importamos. Lo que el país exporta beneficia, sin lugar a dudas, a los dueños y trabajadores de las empresas que ahora venden mercancías y servicios a los chinos, un número más o menos limitado. Pero los que nos beneficiamos de las importaciones de China somos todos porque ahora compramos ropa, zapatos deportivos, aparatos electrónicos y cientos de otros productos que los chinos están en capacidad de producir y vendernos a una fracción del precio que tendríamos que pagar por esos mismos productos manufacturados en Norteamérica. Para dar sólo un ejemplo: por

varios siglos la ropa de seda estaba sólo al alcance de la gente rica. Hoy, gracias al comercio con China, la seda está al alcance de norteamericanos de bajos ingresos. Es decir, el libre comercio aumenta el nivel de vida de las masas, ya que son esas masas las que no pueden pagar la diferencia de precio que impone un arancel o una cuota de importación, medidas oficiales diseñadas para favorecer a ciertos y determinados grupos de presión cercanos a los corredores del poder.

El argumento económico del libre comercio fue claramente expuesto por el economista inglés David Ricardo (1772-1823) y es increíble que dos siglos más tarde una idea tan fundamental como esta no haya todavía calado totalmente en la clase política. Ricardo hablaba de los costos comparativos, hoy mejor conocidos como ventajas comparativas. Ellas comprueban que inclusive en el caso de que un país pueda producir absolutamente todo más barato que en el exterior, le conviene a su gente especializarse en la producción de bienes servicios donde la ventaja económica es mayor, importando todo lo demás. Esta realidad económica es lo que asegura que la globalización beneficia a todos los habitantes de la Tierra, exceptuando sólo aquellos que perciben altas rentas debido a privilegios políticos.

Como siempre sucede, quienes más vociferan son quienes están en peligro de perder sus privilegios, en este caso los textileros y la industria de la confección. Ellos se benefician directamente de los 24.400 millones de dólares que los estadounidenses todavía pagan en sobreprecio por su vestimenta y las telas que adquieren. Andrew Tanzer, de la revista Forbes, estima que las cuotas de importación hacen que un suéter que se vendería en $32 le cuesta al consumidor $44. Los consumidores no vamos a salir a manifestar en las calles por $12, pero los empresarios proteccionistas y los congresistas que representan los estados con alta concentración de industrias textiles sí están dispuestos a dar la pelea.

También es interesante notar que los trabajadores que se aferran a sus puestos en industrias no competitivas y, por lo tanto, en franca decadencia, no se benefician. Por el contrario, los trabajadores despedidos de la industria de la confección están hoy en día ganando 34 por ciento más en otras labores.

Recordemos también que fue David Ricardo quien primero acusó al Banco de Inglaterra, en 1809, de ser el culpable de la inflación, al imprimir demasiados billetes, por lo que los políticos en Washington no serían los únicos que hoy aprenderían mucho leyendo sus textos de economía.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 25 de mayo de 2000. © Todos los derechos reservados.

Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

la ventana
ROTA

Centenario de Hayek

por Carlos Ball

Tuve recientemente el enorme placer de cenar en Filadelfia con Laurence Hayek, hijo del profesor Hayek, durante una conferencia de la Atlas Economic Research Foundation. El 8 de mayo se celebra el centenario del nacimiento de Friedrich von Hayek, doctor en economía, ciencias políticas y derecho, quien fue galardonado con el premio Nobel de economía en 1974.

De vez en cuando me preguntan quién ha tenido mayor influencia en mi manera de pensar o cuál libro describe mejor la filosofía de la libertad individual. No son preguntas fáciles, pero suelo contestar "Los fundamentos de la libertad" de F. A. Hayek, publicado originalmente en inglés en 1960 bajo el título "The Constitution of Liberty". Allí Hayek sostiene que aun un modesto grado de planificación central requiere de una maquinaria coercitiva y el poder que esta brinda atrae a líderes sin escrúpulos.

En "Camino de servidumbre", Hayek nos advirtió sobre la concentración del poder en manos de funcionarios y su creciente discrecionalidad, afirmando que la barbarie es el resultado, no intencional pero sí inevitable, de los intentos socialistas de reorganizar nuestra civilización comercial.

En nuestro siglo Hayek fue el principal defensor del orden espontáneo, en oposición a las múltiples utopías propuestas por los socialistas de todos los colores y partidos, que de alguna u otra forma pretenden planificarnos la vida y decirnos lo que más nos conviene. Ha sido el orden espontáneo a lo largo de la historia de la humanidad lo que impulsó el desarrolló del idioma, de nuestras costumbres, de la jurisprudencia, de los gobiernos liberales bajo constituciones que limitan el poder del estado y también de la economía de mercado, es decir, de las instituciones fundamentales del hombre libre. Según Hayek, el progreso de la humanidad proviene del genio y creatividad de individuos en su libre interacción con los demás, no de los designios de reyes, politicastros y caciques.

Para Hayek y también para su viejo maestro, Ludwig von Mises, el progreso "es el producto de la acción humana, pero no del diseño o planificación". Así como el lenguaje surgió de individuos tratando de comunicarse entre sí, los mercados surgen por la acción de individuos intercambiando bienes y servicios, aportando trabajo y cosas de menos valor para ellos a cambio de otras de mayor valor para sí.

La inmensa aceleración del progreso y bienestar humano, el fin de las pestes y hambrunas que mantenían estática la población del mundo, se despliega primero en aquellos países donde se vive bajo el imperio de las leyes y no de los hombres. Ese es un tema permanente en la obra de Hayek, gran defensor de la seguridad jurídica y de "leges", palabra latina, antónimo de "privilegios".

Esa conexión íntima y directa de la igualdad ante la ley con el bienestar económico y ausencia de corrupción la vemos claramente al comparar los actuales niveles de vida en países como Singapur vs. Cuba, Irlanda vs. Libia, Chile vs. Venezuela.

Mientras tantos de nuestros intelectuales contemporáneos han dedicado sus vidas a imponernos soluciones supuestamente "científicas" a los problemas de la humanidad, Hayek ha sido el más exitoso adalid de la libre y espontánea interacción de la gente, radicalmente opuesto a todas las formas de estatismo que no nos ofrecen verdadero bienestar ni progreso ni paz ni libertad.

Laurance Hayek contaba que su padre, ya viejo y enfermo, se sonreía de oreja a oreja cada vez que alguien le recordaba lo acertado de su predicción sobre el colapso de la cleptocracia soviética. Otra anécdota tiene que ver con Sir Antony Fisher, quien a raíz de la publicación de "Camino de servidumbre" visitó a Hayek en la London School of Economics para contarle de sus planes de lanzarse a la política y así tratar de revertir el impulso estatista de la postguerra. Hayek, por el contrario, lo instó a fundar un instituto que promoviera las ideas liberales entre intelectuales, quienes influirían en la ciudadanía y esta entonces impulsaría a los políticos por el camino de la libertad. Sir Antony procedió a fundar el Institute of Economic Affairs en Londres y, luego, el Manhattan Institute y la Atlas Foundation en Estados Unidos.

Mi propia anécdota no es de similar importancia, pero muestra la sencillez de este gigante. Luego de la conferencia de la Sociedad Mont Pelerin (fundada por Hayek) en la Universidad de Cambridge en 1984, cuyos temas principales fueron discusiones del "Camino de servidumbre" que cumplía 40 años y del libro "1984" de George Orwell, publiqué un suplemento de varias páginas en El Diario de Caracas. Recibí una carta de Hayek agradeciendo el envío del suplemento y pidiéndome que le mandara copias de algunas de las fotografías, prometiendo reembolsarme su costo.

De la vigencia del pensamiento de Hayek no hay ninguna duda. En 1978 publicó "La desnacionalización del dinero", recomendando la abolición del monopolio estatal sobre la moneda para impedir el empobrecimiento de los pueblos por indisciplina fiscal y regímenes inflacionarios. Con razón mantenía que se trata de una reforma crucial que puede decidir el destino de la civilización.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 05 de mayo de 1999. *© Todos los derechos reservados.*

Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

Derechos y más derechos

por Carlos Ball

Observamos claramente cómo la inflación monetaria destruye el bienestar de brasileños, rusos, mexicanos y venezolanos. Pero actualmente todos sufrimos de otro tipo de inflación igualmente dañina porque nos conduce inexorablemente a la pérdida de nuestra libertad: la inflación de "derechos".

Mientras escribo esta columna, en el Congreso de Estados Unidos se debate un proyecto de ley sobre los derechos del pasajero en las líneas aéreas. Es cierto que volar es una experiencia crecientemente desagradable. No sólo está uno expuesto a que los empleados de la aerolínea y los agentes de las aduanas nos traten como si fuéramos terroristas y narcotraficantes, sino que también nos tratan como atrasados mentales, portadores de paquetes encomendados por desconocidos. Una vez dentro del avión, nos confinan al mínimo espacio físico posible y mientras más rápidos son los aviones, más se tardan en aparecer nuestras maletas. Pero peor todavía serán las leyes "protectoras" que actualmente discuten los congresistas porque significarán tarifas más altas en los pasajes aéreos. Los políticos suelen creer que pueden imponer costos adicionales a las empresas y que nadie tendrá que pagar por ellos.

Ya nos enteraremos cuáles son nuestros nuevos "derechos" como pasajeros, pero lo que está claro es que cada grupo de activistas lucha por darle categoría de "derecho" a su esquema o a su queja: derecho de los menores a no trabajar (como si el trabajo fuera algo degradante), derecho a un ambiente libre de humo de cigarrillos en los restaurantes y bares, derecho de los homosexuales a ser reconocidos como parejas, derecho de los minusválidos a acaparar los mejores puestos de estacionamiento aunque muchos de estos permanezcan vacíos, derechos de minorías étnicas a tratamiento especial porque sus abuelos fueron maltratados, derecho de las señoras parturientas a quedarse dos días en el hospital por cuenta del seguro aunque su médico no lo considere necesario, derecho a una semana de permiso para el marido, etc.

En estos días un juez decidió que una niña que no puede subsistir sin estar conectada a complejos aparatos médicos tiene el derecho a que la escuela donde estudia le suministre una enfermera a tiempo completo para atenderla a ella sola.

Por otra parte, el principal fabricante de creyones de cera acaba de anunciar que está buscando un nuevo nombre para cambiar la denominación de "rojo indio" porque los descendientes de los indígenas norteamericanos se quejan de la violación de sus derechos. Y me limito aquí a enumerar algunos "derechos humanos", porque si vemos un rato a CNN nos enteraremos de los derechos de las ballenas, de las focas, de la maleza en las selvas tropicales, etc.

El problema es que cada día se debilita más la línea divisoria entre lo que es un derecho y lo que es un privilegio. La razón es que los políticos ganan votos promoviendo esa confusión y ofreciéndonos como "derecho" cosas deseables, pero que alguien tendrá que pagar por ellas. También resulta grave que, en medio de este verdadero vendaval de derechos inventados en beneficio de grupos de presión políticamente poderosos, ciertos derechos fundamentales como nuestro derecho a dedicarnos al trabajo de nuestra preferencia es coartado por funcionarios de gobiernos cuya verdadera razón de ser es proteger nuestra vida, nuestra propiedad y nuestros derechos naturales.

Los códigos, leyes y estatutos que impiden que la gente trabaje en el oficio de su preferencia sin un permiso, certificado o licencia emitido por algún burócrata es realmente una violación de un derecho humano básico. Casi todas esas certificaciones fueron promulgadas cuando se pensaba que la planificación por parte de los funcionarios y expertos oficiales reemplazarían al mercado. Y siguen vigentes porque benefician a los que ya gozan de permisos y licencias, al dificultar el ingreso de nuevos competidores a un mercado que mantienen relativamente cerrado con apoyo oficial.

El transporte aéreo mejorará en la medida que aumenta la competencia. ¿Por qué no puedo volar en Iberia, Aeroméxico o British Airways entre Miami y Nueva York? El mercado también ofrece maneras mucho más confiables y eficientes para indicarnos cuál es el mejor plomero, barbero, taxista, abogado o cirujano. La intervención del burócrata sólo aumenta los costos al crear oligopolios que reducen la oferta y al impedir el flujo de información que el consumidor requiere para hacer la selección que más le conviene.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 17 de marzo de 1999. © Todos los derechos reservados.

Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

Regulación versus libertad

por Carlos Ball

El problema más difícil que enfrenta la humanidad a fines del siglo XX es defenderse del afán de políticos, burócratas y activistas en regularnos la vida a todos, según su propia visión de lo que es conveniente, justo, saludable o apropiado.

Éticamente nos regimos por los Diez Mandamientos que conocemos y entendemos. Si alguna vez necesitamos refrescar la memoria, los encontramos claramente expuestos en una sola página. Pero los políticos, burócratas y activistas de ingeniería social quieren regir nuestras vidas a través de cientos de miles de páginas de leyes, decretos, regulaciones, reglamentos, normas, ordenanzas, estatutos, etc. tan numerosos y complicados que ni el más brillante y estudioso abogado los puede conocer todos, resultando ininteligibles para el ciudadano común, quien elige a sus gobernantes para que proteja su vida y su propiedad, no para que lo convierta en esclavo de utopías oficiales.

Habría que congelar la promulgación de nuevas leyes y regulaciones sin que previamente se anulen al menos diez otras que siguen vigentes sin razón de ser y que significan un freno al desarrollo o una fuente de corrupción.

Las regulaciones gubernamentales nos afectan a todos en los alimentos y medicinas que compramos, en el uso que le podemos dar a nuestra propiedad y lo que podemos o no hacer con nuestros propios negocios. En esto último, tengo la suerte que los redactores de la Constitución de Estados Unidos previeron la tendencia de los gobernantes a meterse con los periodistas, por lo que se añadió la Primera Enmienda, pero no previeron que interferirían con todos los demás oficios sin excepción.

El exceso de regulaciones aumenta los costos de todo lo que compramos, reduce la calidad de los productos y servicios que recibimos, además de aumentar el costo de contratar a todo empleado, convirtiéndose así en una barrera a lo que todos los políticos dicen querer alcanzar: el pleno empleo.

Según el profesor Thomas Hopkins del Rochester Institute of Technology, el costo en Estados Unidos de cumplir con las regulaciones federales en 1996 fue de 677,000 millones

de dólares. Eso, desde luego, significa que en el precio de todo lo que compramos durante el año hay un impuesto escondido, parte de esa monstruosa suma.

Richard Vedder del Center for the Study of American Business va más lejos, al indicar que el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales reduce la productividad y la actividad económica en 1.300.000.000.000 dólares al año, o sea que reduce el tamaño de la economía de Estados Unidos en un tanto equivalente al tamaño de la economía alemana.

Y si tan inmenso daño se le está haciendo a una de las economías más prósperas del mundo, las regulaciones impuestas por políticos y burócratas en América Latina son sencillamente criminales, logrando mantener al grueso de la población en la miseria.

La arrogancia oficial es tal que promueve la absurda idea que los fabricantes de cualquier producto lo harían mal o tratarían mal a sus trabajadores y envenenarían a la gente con el humo de sus chimeneas si no estuviera el burócrata respaldado por los reglamentos y la policía defendiendo al pueblo. Por el contrario, yo me siento mejor tratado y me da mucha más confianza cuando hago alguna transacción comercial privada que cuando me veo obligado a ingresar a una oficina pública. La razón es que fuera del ámbito gubernamental hay competencia y diferentes opciones en todo y para todos.

Cualquiera que ha tenido alguna posición de responsabilidad en cualquier empresa privada sabe la importancia de proteger el buen nombre de la compañía y de la marca para poder tener éxito en el mercado. Sólo cuando se opera un monopolio es que resulta económicamente atractivo fabricar y vender productos de segunda y dar mal servicio. Además, que los monopolios privados sólo pueden existir cuando las autoridades imponen barreras al ingreso de nuevos competidores. Es decir, los monopolios siempre son el resultado de la acción gubernamental, a menudo por favoritismo político.

El reto del fin de siglo es revertir a los políticos y burócratas a su antigua función de servir al público, para lo cual hay que despojarlos de esa manía de imponernos que vivamos y actuemos como ellos quieren, como si todos dependiéramos de su mejor criterio para llevar adelante nuestras vidas. Claro, hay una amenaza todavía mayor: remitir la creciente facultad reguladora del burócrata local a manos de un gobierno mundial, regido por burócratas internacionales que no han sido elegidos por nadie, del tipo que pulula por las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y las demás agencias multilaterales que se reproducen como conejos.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 07 de enero de 1999. © Todos los derechos reservados.

Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

Inmigración: ¿A favor o en contra?

por Carlos Ball

Un tema muy controversial que suele caldear los ánimos y subir el tono de las discusiones en es el de la inmigración. Siendo yo un inmigrante en Estados Unidos, no sería muy lógico que escribiera en contra de la inmigración, pero la realidad es que entre sus más ardientes enemigos se cuentan muchos que son inmigrantes o hijos de inmigrantes.

Puedo honestamente decir que siempre fui defensor de la libre inmigración, habiendo crecido en Venezuela, país que logró una extraordinaria y rápida transformación gracias en buena parte a más de 300 mil inmigrantes y refugiados que llegaron desde terminada la Segunda Guerra hasta 1958. Esos inmigrantes representaron hasta casi el 10% de la población.

Por supuesto que la prosperidad venezolana de esa época se debió también a que gozábamos de una inflación inferior a la de Estados Unidos, una moneda tan fuerte como el dólar, impuestos bajos, explotación petrolera no politizada y operada por el sector privado, poca intervención gubernamental en la economía y un sistema judicial que todavía no había sido corrompido por los políticos, todo lo cual se reflejaba en altas tasas de inversión tanto nacional como extranjera, bajo desempleo, aumento año tras año del nivel de vida de la población y otra cosa muy importante no reflejada en las estadísticas nacionales: gran optimismo respecto al futuro porque la nueva generación vivía mucho mejor que la de sus padres.

Muchos de mis compatriotas argumentaban, al menos en privado, que la inmigración europea era "buena", pero no la proveniente de Colombia, Perú, Chile, América Central o del Caribe. Tal premisa no resiste el más somero análisis. Difícilmente se puede concebir una inmigración de gente más pobre y menos educada que los chinos que emigraron masivamente a Hong Kong en los años 50 y 60. Sin embargo, esa gente logró en apenas una generación transformar una roca con una superficie de 1.092 kilómetros cuadrados y sin más riquezas naturales que un puerto, en la economía de mayor crecimiento en la historia de la humanidad, alcanzando un producto interno bruto en el año 2001 de US $164 mil millones (comparado con US $71 mil millones en Venezuela) y un ingreso per cápita de US $23.997 al año (comparado con US $3.213 para los venezolanos).

La inmigración de gente que quiere trabajar y busca un mejor futuro para su familia no puede ser otra cosa que una inmigración buena para cualquier país. Sólo las malas leyes del país anfitrión pueden convertir la inmigración en algo negativo. Ese peligro existe en Estados Unidos, pero lo vemos más claro en Europa.

La prensa y líderes políticos de todas partes han manifestado su desagrado y repudio a la inesperada victoria del xenófobo Jean-Marie Le Pen en Francia, quien desplazó al primer ministro socialista Lionel Jospin en la primera ronda electoral francesa.

Esa victoria de Le Pen se debe en gran parte al rechazo de un creciente número de franceses al asfixiante Estado Benefactor, altísimos impuestos e inflexibles leyes laborales que mantienen muy alto el desempleo, mientras cientos de miles de inmigrantes viven de la asistencia pública. Entonces, ¿son los árabes, los turcos y los 'sudacas' los malos o, acaso, son las leyes?

El canciller alemán lamentó el resultado de la primera vuelta electoral francesa diciendo: "Es muy lamentable que la extrema derecha se ha fortalecido tanto en Europa". Pero al Sr. Gerhard Schroeder no pareció importarle que la extrema izquierda francesa -dividida en partidos como Lucha de los Trabajadores, los Verdes, la Liga Comunista Revolucionaria, el Partido Comunista y el Partido de los Trabajadores- obtuviese 21% de la votación; es decir, más votos que Jacques Chirac (19,8%) y que Le Pen (16,8%).

En Estados Unidos, los conservadores -o sea el ala derecha del Partido Republicano- tienden a ser crecientemente antiinmigración. Lamentablemente, estos conservadores (o ultra derecha, para utilizar el término preferido por la prensa) no parecen darse cuenta lo ilógico que resulta tratar de defender el libre flujo de capitales, bienes y servicios, pero no de la mano de obra. ¿Por qué es bueno el dólar que huyó de Chávez y se deposita en una cuenta bancaria en Miami, pero no los conocimientos de un joven venezolano que quiere venir a trabajar a Estados Unidos y las autoridades le hacen virtualmente imposible que pueda hacerlo legalmente?

Esa actitud antiinmigración que predomina hoy en el Partido Republicano quizás le cueste la reelección al presidente George Bush, entre otras razones porque ya la gente olvidó cómo la administración Clinton trató inhumanamente a los balseros cubanos que trataban de huir del comunismo castrista.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 08 de mayo de 2002. © Todos los derechos reservados.

Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

El fraude de la "justicia social"

por Carlos Ball

Bajo el manto de "justicia social" los políticos disfrazan el reparto de privilegios a los grupos que los apoyan: sindicatos, maestros, campesinos, industriales, abogados litigantes, burócratas, ancianos, indígenas, etc. La popularidad de la "justicia social" en parte se debe a que no tiene una definición clara y precisa. Cada político la define según conviene para lograr apoyo a su proyecto de ley o la regulación de alguna actividad.

La expresión "justicia social" fue por vez primera utilizada por un sacerdote siciliano, Luigi Taparelli, en 1840 y pronto se la apropiaron las elites intelectuales que aspiraban conducir el mundo a la utopía del "socialismo científico", donde la razón y mentes privilegiadas regirían el universo. Ellos sabían mejor lo que realmente le convenía a la plebe ignorante. Así, la "justicia social" desde temprano estuvo ligada a la economía dirigida y planificada. Según los políticos en ejercicio, el individuo importa poco vis-a-vis el bien común. Al comienzo había mucho de buenas intenciones en el concepto de "justicia social", como por ejemplo que la gente acomodada ayudara a través de fundaciones caritativas privadas la adaptación de campesinos a los nuevos centros industriales. Pero el profesor Friedrich Hayek fue uno de los primeros en denunciar la "justicia social" cuando ésta dejó de ser una virtuosa y bondadosa decisión espontánea y personal de ayudar al prójimo para convertirse en imposiciones—desde las alturas del poder—de un ideal abstracto y manipulable.

Se creó una falsa imagen de la gente común como víctimas, ya que al haber víctimas tiene que existir un victimario. Así, el filósofo polaco Leszek Kolakowski, en su historia del comunismo escribió que el paradigma fundamental de esa ideología estaría para siempre garantizado porque el sufrimiento de uno es causado por opresores y las cosas malas que le suceden no son culpa de uno sino de los ricos de su país, o peor aún, de los ricos de ultramar. Claro, el remedio comunista, nazi y fascista para acabar con la injusticia social condujo a hambrunas y campos de concentración, infinitamente peores que el mal fantasmagórico inventado por intelectuales como excusa para detentar el poder.

En el tercer volumen de su obra *Principales Corrientes del Marxismo* (1978), Kolakowski escribe que "el marxismo actualmente ni interpreta ni cambia al mundo: es meramente un repertorio de consignas que sirven para organizar intereses variados".

Según Hayek: "Una de las grandes debilidades de nuestro tiempo es que no tenemos la paciencia ni la fe para crear organizaciones voluntarias con los fines que valoramos, sino que de inmediato le pedimos al gobierno que utilice la coerción (o fondos sustraídos coactivamente) para cualquier cosa que parezca deseable para muchos. Sin embargo, nada tiene peor efecto sobre la participación ciudadana que cuando el gobierno, en lugar de ofrecer meramente la estructura esencial para el crecimiento espontáneo, se vuelve monolítico y se encarga de todas las necesidades, las cuales en realidad pueden sólo ser satisfechas por el esfuerzo común de muchos".

Para Hayek, la justicia es siempre individual y "nada ha destruido más nuestras garantías constitucionales de libertad individual que el intento de alcanzar el espejismo de la justicia social". El mercado premia a quienes mejor satisfacen los requerimientos y necesidades de los consumidores y manipular los premios significa fomentar la ineficiencia y la pobreza misma. Ya vimos los logros de Stalin, Mao y Castro bajo el lema marxista "de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad".

La Constitución de Estados Unidos no autoriza al gobierno a confiscar la propiedad de un ciudadano para distribuir ayuda y beneficios a otros menos afortunados. Sin embargo, el concepto de "justicia social" se utiliza a diario en Washington para gastar la mayor parte del presupuesto federal. Entre los ancianos se concentra gran parte de la riqueza en Estados Unidos, pero los dos grandes partidos políticos se pelean en estos días para ver cuál logra concederles mayores beneficios en servicios médicos y en la adquisición de medicinas. Ese dinero, claro está, saldrá del bolsillo de la población joven y trabajadora, sector que participa proporcionalmente menos en los procesos electorales y que, por lo tanto, termina siendo menos merecedora de la "justicia social" distribuida por los políticos.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 25 de junio de 2003. © Todos los derechos reservados.

Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

El empobrecimiento de América Latina

por Carlos Ball

Cualquier investigación seria sobre el desarrollo económico latinoamericano arroja resultados lamentables. En la década de los noventa, los campesinos latinoamericanos emigraban al extranjero en búsqueda de un nivel de vida aceptable, mientras que en el nuevo siglo observamos un creciente número de profesionales y ejecutivos latinoamericanos emigrando por las mismas razones. Es decir, el empobrecimiento se ha democratizado, afectando a la clase media y también a familias que antes se consideraban ricas.

La región pierde capital humano aceleradamente. Disminuye el influjo de capital privado en forma de inversiones directas. Aumenta la fuga de capitales nacionales buscando protección contra la inflación, devaluaciones y los "corralitos" (es decir, al despojo oficial de la propiedad privada), mientras los gobiernos tratan de llenar el vacío con préstamos de los organismos multilaterales que tienden a fomentar la corrupción, a posponer decisiones políticas difíciles y a hipotecar el futuro de las nuevas generaciones.

Junto con los préstamos del FMI se imponen aumentos de impuestos que, al reducir los incentivos al trabajo y la inversión, incrementan el desempleo y agravan la enfermedad latinoamericana.

Es una tragedia que está a la vista de quien se moleste en leer la prensa, pero nuestros gobernantes y políticos siguen luchando contra enemigos imaginarios. Ayer era el imperialismo que nos obligaba a intercambiar materias primas baratas por productos manufacturados caros. Hoy es la globalización, los subsidios agrícolas de los países ricos y las "asimetrías".

El verdadero problema latinoamericano es bastante más profundo y mucho más difícil de combatir porque los enemigos del bienestar y la prosperidad son las instituciones mismas: nuestros gobiernos, nuestras leyes, nuestros sistemas judiciales politizados, nuestras constituciones y una educación pública que a lo largo de varias generaciones ha deformado la manera de pensar y de actuar de la ciudadanía. Lejos de promover la responsabilidad individual, la propaganda política en la educación pública enseña a los niños que el gobierno

es el pariente rico y bondadoso que siempre estará allí para ayudarles, cuidarlos y hacer posible su felicidad. El problema, claro está, es que el gobierno sólo puede darnos lo que le quita a otro.

El fondo del mal latinoamericano es que tanto los políticos y funcionarios como la mayoría de los electores ignoran el verdadero papel de la constitución y las leyes. La constitución no debe ser una piñata ni los políticos y funcionarios los encargados de distribuir juguetes y caramelos. La constitución tendría que ser un documento breve y preciso, que defienda los derechos naturales del ciudadano de los abusos de autoridad de los gobernantes. Las leyes deben ser muy pocas, también claras y de aplicación general, en lugar de miles de páginas de regulaciones que resultan del forcejeo político en busca de privilegios para grupos de presión, en perjuicio de la mayoría.

El inmenso crecimiento de los gobiernos latinoamericanos es el resultado de la concentración del poder político y económico en manos de políticos y burócratas. De allí provienen las decisiones que nos empobrecen, con la concesión de privilegios especiales a grupos sindicales y empresariales que utilizan sus conexiones políticas para destruir la competencia, lo cual golpea la libre iniciativa y elimina la libertad de elegir de los ciudadanos. Los salarios mínimos producen desempleo; los altos impuestos del estado bienestar impiden el ahorro, mientras que los servicios públicos recibidos a cambio son infames y cada día peores; los controles de precios producen escasez; la politización del sistema monetario empobrece a la ciudadanía entera y fomenta la huída de capitales, mientras que la redistribución de la riqueza ha sido el mayor de los fraudes porque sólo los políticos y sus amigos se han beneficiado.

Los latinoamericanos tenemos la costumbre de copiarnos sólo las malas políticas de los países industrializados, los cuales jamás hubieran logrado desarrollarse si siendo todavía pobres las hubiesen puesto en práctica. Además, regulaciones y licencias para todo es lo que convierte en ricos y poderosos a políticos y funcionarios, pero sólo desarmando esa pesada estructura gubernamental y exigiendo amplia libertad económica podrán los latinoamericanos dar un vuelco hacia la prosperidad y el bienestar.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 03 de marzo de 2003. © Todos los derechos reservados.

Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

Más estado significa más pobreza

por Carlos Ball

Según el *Informe de Desarrollo Humano 2003*, publicado por la ONU, la miseria sigue predominando en África, mientras "aproximadamente la mitad de los países de América Latina y el Caribe experimentaron un retroceso o un estancamiento en ingresos durante la década de los noventa".

América Latina y África han sido víctimas de múltiples experimentos fracasados y ya debemos estar convencidos que la ayuda externa y las recomendaciones de las agencias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional lejos de resolver problemas los eternizan.

El caso africano es espantosamente triste: dos tercios de los países africanos han empeorado o no han aumentado sus ingresos per cápita desde su independencia en los años sesenta. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se creía que no podía haber peor sistema que el colonial, pero el socialismo estatista surgido a raíz de la independencia de los países africanos ha resultado mucho peor.

En América Latina nos independizamos en el siglo XIX y en el siglo XX creíamos fervientemente que al reemplazar a nuestros dictadores militares por democracias pronto acortaríamos la brecha en bienestar que nos separa del mundo industrializado. Pero la realidad ha sido diferente. Cambiamos a generales indeseables por líderes civiles aún más corrompidos y menos patriotas, quienes lejos de ampliar la libertad individual que promueve el esfuerzo y el ahorro, han aplastado a sus pueblos con infinidad de leyes, reglamentos, permisos y regulaciones, disparando el compadrazgo, los privilegios para ciertos y determinados grupos, el proteccionismo y la miseria.

Como afirmaba Juan Bautista Alberdi, padre de la primera constitución argentina: "En Sud-América se toma por reforma de un país, lo que es reforma de un papel escrito. En lugar de cambiar la educación de sus hombres, cambian las palabras de sus leyes y con eso creen haber hecho una revolución, una reforma".

Los gobiernos llamados "neoliberales"—como el de Pérez en Venezuela, Fujimori en el Perú y Menem en la Argentina—instrumentaron ciertas reformas económicas positivas que sólo condujeron a darle mala fama a la economía de mercado por no llevarse a cabo las reformas paralelas necesarias en las instituciones políticas. Como bien lo ha explicado Douglass North, sin la imposición de límites al gobierno ni garantizar los derechos de propiedad y la libertad individual, no pueden existir mercados eficientes.

La verdadera solución a la pobreza y al atraso sólo se logra con instituciones políticas que limitan el poder gubernamental, además del debido equilibrio y separación de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. De lo contrario, la democracia se convierte en piñatas cada 4 ó 5 años para la redistribución del premio entre los poderosos: políticos, empresarios, sindicalistas, etc.

Para alcanzar la prosperidad económica hay que incrementar la productividad y ampliar los mercados. Las principales barreras al aumento de la productividad son las regulaciones que hacen menos atractiva la inversión tanto nacional como extranjera y la inflexibilidad de las leyes laborales. El libre comercio implica una tenaz competencia que conduce a un constante esfuerzo innovador en beneficio del consumidor, mientras que la intervención gubernamental preserva el statu quo de monopolios y oligopolios.

La economía informal que predomina en casi toda América Latina es prueba fehaciente del exagerado costo de las regulaciones. Sólo los empresarios grandes pueden darse el lujo de cumplir con todo el papeleo oficial o pagar sobornos a funcionarios que les permiten ignorar las reglas. Por su parte, el informal no goza de ninguna seguridad jurídica, sus activos no se aprecian ni tiene acceso al crédito para poder crecer. Se trata, entonces, de mercados con mínima competencia, sin transparencia y donde el exitoso no es quien sirve mejor al consumidor sino quien logra los mejores contactos políticos.

La división del trabajo es la base fundamental de la productividad. En la medida que aumenta la especialización, tienden a bajar los costos y el límite de la especialización lo impone el tamaño del mercado. Los gobiernos latinoamericanos han sido tradicionalmente enemigos de la especialización. Buscaban afanosamente construir chimeneas, plantas siderúrgicas y ensambladoras de vehículos sabiendo que podían importar esos bienes más baratos. Todavía hoy, los políticos luchan por retardar la apertura a las importaciones baratas, cuando dejado en libertad el mercado rápidamente revela dónde yacen las ventajas comparativas de la nación, favoreciendo al pueblo con la importación barata de todo lo demás.

El atraso africano y latinoamericano se debe al tamaño excesivo de los gobiernos y sus malas leyes.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 11 de agosto de 2003. © Todos los derechos reservados. Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

Caridad con dinero ajeno

por Carlos Ball

Una despreciable costumbre que cada día gana nuevos adeptos, sin que la gente se atreva a criticarla, es la de hacer caridad con dinero ajeno. En diciembre, luego del maremoto en Asia, surgió una competencia mundial entre gobiernos para ver cuál aportaba más dinero para auxiliar a las víctimas y reparar los daños. Se olvida que el fin no justifica los medios. Ayudar a las víctimas de una tragedia es admirable, pero debemos aplaudir sólo las personas e instituciones que prestan ayuda con esfuerzo y financiamiento propio.

Es evidente que más de la mitad del dinero que pagamos en impuestos en el mundo occidental está destinado a fines que nada tienen que ver con la verdadera función del gobierno: proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos para que cada uno pueda dedicarse libremente a la búsqueda de su propia felicidad. Algunos consiguen esa felicidad ayudando al prójimo, como fue el caso de mis tres tías monjas, a quienes tanto quise y admiré. La tergiversación de esa abnegada benevolencia ocurre cuando la caridad se hace con dinero de los impuestos.

Las escuelas públicas enseñan a nuestros jóvenes que los gobiernos cumplen una obligación social al desviar el dinero de los impuestos para servir de San Nicolás. Así vemos que año a año aumenta el costo de educar a un muchacho y ese dinero, lejos de mejorar la calidad de la educación recibida, aumenta los salarios y beneficios "sociales" de los sindicatos de maestros.

Supuestamente se trata de una práctica perfectamente democrática porque una mayoría eligió a las autoridades que toman tales decisiones o una mayoría votó favorablemente en un referendo para aumentar "apenas" un medio centavo el impuesto de ventas.

Así, crecientemente se utiliza el concepto del bien público para corroer los fundamentos de la libertad individual, cuya protección es la razón de ser de los gobiernos. No hay que llegar a los extremos criminales de Hugo Chávez o Fidel Castro -expropiando y encarcelando a la oposición- para sufrir un despojo por parte de la burocracia gobernante. Anoche vi en la televisión el reportaje sobre una familia que compró y restauró una vieja casa en Harlem,

barrio de Nueva York convertido desde hace medio siglo en foco de pobreza tercermundista por los controles de alquileres que provocaron el abandono masivo de los dueños. La municipalidad, en lugar de fomentar la reparación de dilapidadas viviendas, "premió" a la familia aumentándole el impuesto de propiedad a su casa de 1.600 dólares a 26.000 dólares anuales.

También es dañina la desdichada creencia que las empresas tienen una obligación "social" de hacer caridad. Empezando con que el dinero no les pertenece a los ejecutivos que se llevan la gloria sino a los accionistas y la verdadera obligación social de la empresa es producir utilidades, lo cual sirve para medir cuán bien utiliza escasos recursos en beneficio de su clientela, sus dueños y sus empleados. La empresa privada es mucho más eficiente que el gobierno porque confronta diariamente un "electorado" en el mercado, mientras que los políticos lo confrontan cada dos, cuatro o seis años, teniendo además la perversa facilidad de manipular distritos y comprar votos con dinero ajeno.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 24 de febrero de 2005. © Todos los derechos reservados.

Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

La incompatibilidad del socialismo y la libertad

por Carlos Ball

Las últimas décadas del siglo XX significaron para los venezolanos el acelerado crecimiento del Estado y de promesas políticas de redistribución, bajo una constitución socialista que ofrecía lo que ningún gobierno podría jamás cumplir, mientras que las cláusulas constitucionales relativas a garantías económicas y al respeto a la propiedad privada se mantuvieron suspendidas casi todo el tiempo. La irremediable consecuencia fue la transformación en poco más de una generación de un país rico, donde básicamente se respetaba la libertad individual, en otro que alardeaba de gran democracia, pero donde el creciente control económico y la inflexibilidad de leyes laborales destruyeron la prosperidad y dispararon el desempleo. Así, los venezolanos cambiamos el derecho cotidiano a comprar y vender lo que quisiéramos por el derecho a elegir periódicamente a un dictador económico.

Parte de la tragedia venezolana es que la gran mayoría de los intelectuales, maestros y periodistas, lo mismo que profesionales y muchos grandes empresarios lejos de defender los derechos económicos del ciudadano apoyaron abiertamente la concentración del poder económico en manos de los políticos. Algunos lo hicieron por profunda ignorancia en materia económica, a pesar de sus diferentes doctorados, y otros por simple conveniencia personal: siempre es más fácil convencer o comprar a un ministro que persuadir a decenas de miles de consumidores en un mercado competitivo.

Así, mientras en los foros internacionales se alardeaba de la democracia venezolana, tras la "nacionalización" del petróleo y la politización tanto del Banco Central como del sistema judicial, un país próspero, optimista y de inmigrantes se había convertido para fines de la década de los 90 en una nación con estadísticas africanas, creciente economía informal, fuga de cerebros e inversiones concentradas en áreas protegidas por nexos políticos. Es decir,

Venezuela le dio la espalda al mercado, avanzando en lo que el gran economista del siglo XX, F. A. Hayek, denominó "el camino a la servidumbre".

No pongo en duda que el sistema democrático es el mejor y más conveniente. El problema es la manera cómo nuestros políticos prostituyen la democracia para favorecer sus ambiciones personales, mientras la educación pública procede a lavar el cerebro de la juventud, inculcando falsas "fallas del mercado" que benefician a los ricos y exprimen a los pobres.

La más superficial observación de la realidad comprueba que las naciones más pobres son aquellas que sufren de mayor regulación y control estatal; mientras que las más ricas son las que se desarrollaron cuando gozaron de gran libertad económica y mínima intervención.

La demagogia socialdemócrata y socialcristiana a lo largo de cuatro décadas condujo a la actual profundización del socialismo chavista: expropiaciones de tierras, incumplimiento de contratos, galopante corrupción, más concentración de la riqueza en manos políticas, altos impuestos, controles de precio y de cambio, todo lo cual refleja un total desprecio por el individuo y la propiedad privada. La redistribución sigue siendo la principal bandera política y como los que menos tienen siempre son mayoría, esa es la clave para ganar elecciones, que Chávez ahora respalda con fraude electrónico en las máquinas de votación. Pero una nación en donde no se respetan los derechos de propiedad no hay incentivos para trabajar duro ni arriesgar capitales, sólo para recibir limosnas. Hayek aclaró "…si por democracia se entiende dar vía libre a la ilimitada voluntad de la mayoría, en modo alguno estoy dispuesto a llamarme demócrata".

La actual tragedia venezolana se complica por la falta líderes políticos que comprendan lo sucedido y rechacen el socialismo.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE), publicado el 02 de diciembre de 2005. © Todos los derechos reservados.

Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

Un robo legalizado

Por Carlos Ball

La inflación en el fenómeno económico menos comprendido y, al mismo tiempo, el más manipulado por políticos populistas y gobernantes inescrupulosos que se las ingenian para esconder el inmenso daño que hacen destruyendo el valor de la moneda nacional. Durante décadas, los símbolos patrios que aparecen en los billetes latinoamericanos, han sido objeto de soez agravio y desprecio de nuestras autoridades monetarias, que no se cansan de añadir y quitar ceros, y en un infernal juego que destruye el ahorro y el sistema de incentivos de gente decente, con la mala fortuna de haber nacido en países gobernados por ladrones.

Ladrón llamamos a quien nos mete la mano solapadamente en el bolsillo para quitarnos lo que es nuestro. Si hoy tengo cien pesos o cien bolívares o cien soles o cien sucres en mi alcancía, suficiente para comer completo en un buen restaurante; pero si al guardarlos por un tiempo no me alcanzan para comprar un helado, es porque el presidente del Banco Central se puso de acuerdo con el Ministro de Hacienda y con el presidente de la República para robarme. Lo logran con total impunidad; además, insultan nuestra inteligencia dando toda clase de excusas falsas y complicadas, como si se tratase de una acción patriótica. Y, como ellos también tienen el control de las armas, el empobrecido ciudadano no puede hacer más nada que guardar, en el futuro, sus ahorros en una moneda no controlada por gángsters de cuello blanco y además finos, con títulos de Harvard y Yale, quienes se abrazan, se tutean con el embajador de los Estados Unidos y el director gerente del Fondo Monetario Internacional.

El crecimiento económico es sostenible cuando los trabajadores no solo están bien entrenados, sino que además gozan de los incentivos para trabajar duro en la elaboración del mejor producto posible, cuando el capital representado en maquinarias y equipos está creciendo, y cuando la tecnología aumenta la eficiencia y productividad general. Pero nada de esto es posible en un ambiente de desconfianza en la moneda, por lo que el crimen inflacionario destruye las naciones con la misma rapidez que el crack destruye el cerebro de los drogadictos.

Inflación significa que el poder adquisitivo de la moneda se reduce y ello se refleja en el aumento persistente y general de precios. Las acusaciones de especulación lanzadas contra los comerciantes es la excusa más utilizada por políticos y burócratas pícaros, quienes saben (o deberían saber) que los aumentos de ciertos productos no causa inflación porque de no sufrir incrementos la base monetaria, si la gente compra esos productos más caros, tendrá menos dinero para comprar otros productos y servicios, cuyos precios entonces tienen necesariamente que bajar, lo cual mantendrá estable el índice general de precios.

Está comprobado que la inflación no puede ocurrir sin el crecimiento excesivo de la oferta monetaria, porque solo cuando el Banco Central permite la creación de dinero más allá de las necesidades de la gente es que se produce la inflación. El más brillante economista monetario de este siglo, Milton

Friedman, dice que la inflación es “siempre y en todas partes un fenómeno monetario”, tratándose de “demasiado dinero persiguiendo pocos bienes y servicios”.

No es cierto lo que ahora sostiene algunos políticos mexicanos, en el sentido que el rápido crecimiento económico hacer decaer el valor de la moneda. Por el contrario, una mayor producción tiende a bajar los precios y cualquier aumento de precios causado por mayor demanda de mano de obra y por expansión de las fábricas será temporal.

Las distorsiones económicas que ocasiona la inflación tienen altísimos costos, al dedicarse la gente, entonces, a protegerse de sus dañinas consecuencias y a invertir y bienes raíces, oro y en el extranjero, en lugar de ampliar fábricas, crear empleos y mejorar los servicios nacionales.

Artículo tomado del Instituto de Ciencia Política de Colombia. Publicado en el segundo trimestre de 1995.

Discursos

Regulación versus libertad

por Carlos Ball

Agradezco a mis amigos de la Cámara de Industriales del Zulia la amable invitación que me formularan a venir hoy a la ciudad de Maracaibo, cuna de mis antepasados paternos, para que les hable sobre el tema económico del momento, que no es otro que la excesiva intervención del Estado en la vida y actividades privadas de los venezolanos.

Durante el último cuarto de siglo en Venezuela hemos experimentado la contínua expansión de controles gubernamentales a la economía, junto con lo que resulta siempre ser un derivado automático de la intervención; es decir, el desestímulo a la competencia y el correspondiente estímulo a la concentración económica, a la creación de oligopolios y de monopolios.

Si esta tendencia era clara durante los años en que el timón de la economía lo llevaban los discípulos de la Cepal, en su empeño de alcanzar el desarrollo a través de la sustitución obligatoria de importaciones y la guerra declarada a la inversión extranjera, en la actual época de crisis y a partir de la fundación de Recadi, se ha acelerado la concentración de decisiones vitales de índole económico en las manos de funcionarios y políticos.

El economista Harry Johnson, en 1971, formuló claramente la verdadera disyuntiva ante nosotros: “La pregunta es si los objetivos de crecimiento económico se pueden mejor y más eficientemente alcanzar a través de una estricta y centralizada política gubernamental de desarrollo, vigilando y controlando las decisiones de individuos y de empresas privadas, controlando los precios, las importaciones, las inversiones, etc., o si el objetivo es más bien

alcanzable reduciendo la intervención gubernamental al mínimo para mantener la ley y el orden, y dando los servicios de defensa y educación que el público desea pero que no es fácilmente provisto privadamente, y permitiendo la mayor esfera posible a las preferencias individuales y a la iniciativa privada…".

El reducido número de venezolanos que durante los años 60 y 70 manteníamos que el mejor camino era la segunda opción, podíamos solo referirnos a la experiencia de otros países. Hoy, desgraciadamente, podemos aludir a la fracasada experiencia de Venezuela con toda la amargura que nos produce haber derrochado oportunidades que raramente se repiten en la historia de un país.

El modelo venezolano ha sido y sigue siendo hoy el de la búsqueda del desarrollo económico a través del crecimiento del Estado paternalista y de la redistribución forzada de la riqueza por medio del constante incremento del Presupuesto Nacional. El resultado está a la vista de todos, aún de aquellos que se empeñan en no quitarse viseras similares a las que llevaban los caballos de los fruteros y verduleros isleños que transitaban en sus carretas por las calles de Caracas cuando yo era niño. Esas viseras impedían que las mulas se asustaran. Hoy los asustados son los millones de venezolanos que no cuentan con el poder político y los privilegios de cupos, licencias y dólares preferenciales para sobrevivir en una economía cerrada que no depende del consumidor sino del visto bueno del burócrata.

El fracaso político-económico de Venezuela ha sido doble. Primero porque el objetivo de la redistribución de la riqueza no solo no se ha alcanzado sino que la acción interventora del Estado ha sido en sí misma la defensora y la creadora de monopolios y de privilegios, lo cual por una parte ha estimulado la fuga de capitales entre inversionistas que no estaban dispuestos a que su triunfo o fracaso dependiera de una decisión política o burocrática y por otra, cuando la decisión de inversión depende de un privilegio concedido por el estado, esa inversión se realiza al más corto plazo posible porque cuando se pierde el contacto en el ministerio o cambia el gobierno, es aconsejable haber obtenido la utilidad prevista y retirado el capital inicial. Tal tipo de inversión no promueve la creación y mantenimiento de niveles de empleo, lo cual ha sido funesto para el nivel de vida de las clases obreras. Los empresarios instantáneos, creados por los créditos de la Corporación Venezolana de Fomento, están todos ricos, muchos de ellos viviendo en el exterior, las fábricas clausuradas y los obreros desempleados. Tales esfuerzos en la redistribución fueron exitosos en premiar a algunos amigos que luego no fueron perseguidos por la justicia partidista, pero en cuanto al aburguesamiento del proletariado, ha sido un total y completo fracaso. Por el contrario, lo que hemos experimentado en Venezuela, durante los últimos años, ha sido más bien la proletarización de nuestra clase media. Toda la verborrea política actual no puede esconder el hecho que nuestro ingreso per cápita, en términos reales, fue inferior en 1985 que, en 1957, último año de un régimen dictatorial insoportable, pero bajo el cual los venezolanos

gozábamos de mayor libertad económica que hoy en día y ello se reflejaba en las estadísticas nacionales de altos ingresos y baja inflación.

Lo sucedido en Venezuela, si descartamos la magnitud del fracaso y los miles de millones de dólares esfumados durante las administraciones de Pérez y Herrera, no es muy diferente a lo ocurrido en otros países donde el objetivo primordial del Estado paternalista ha sido ganar elecciones a través de la demagogia y bajo la bandera de la redistribución del ingreso.

Bajo el paternalismo estatal, el alcance de beneficios económicos solo es posible a través del proceso político, donde la única manera de surgir es a expensas de otros. En Venezuela hemos visto la alternabilidad del éxito de contratistas adecos, luego copeyanos, luego adecos nuevamente, mientras adecos y copeyanos se alternaban también en puestos burocráticos que pagan tan miserables niveles de sueldos que tienen que ser compensados con la venta de permisos, licencias, cupos, dólares y demás privilegios que dependen exclusivamente de la discrecionalidad del funcionario.

Observamos entonces que el beneficiario del privilegio, de la concesión, del contrato o del monopolio quinquenal está muy lejos de ser escogido en función de su habilidad en satisfacer al consumidor, en función de realizar o producir cosas buenas para el ciudadano y para el país. A esto tenemos que añadir la actitud del desprecio del "establishment" político hacia el "establishment" económico, lo cual esconde toda clase de complejos de inferioridad y de posibles viejos desaires recibidos o marginados. Hay pocas cosas que susciten mayor recelo entre fiscales y funcionarios que el nombre de una empresa con 40, 50 o 60 años de fundada. Desde que estaban en el liceo oyen que los dueños de esa empresa pertenecen a la clase de los opresores del pueblo.

Hay, desde luego, quienes encuentran excusas étnicas para explicar nuestro fracaso económico, tales como que los venezolanos somos flojos, nos contentamos con poco o nos hemos acostumbrado a las migajas que nos dejan caer del Presupuesto Nacional. Pero ¿acaso hay alguna diferencia racial entre los cubanos que han prosperado en Miami y los que se están muriendo de hambre en Cuba? ¿Hay alguna diferencia entre los chinos de Hong Kong y de Taiwán con los chinos de tierra firme? ¿No será que más bien lo que hace la diferencia entre las personas es el ambiente político y la posibilidad de ejercer la libertad en beneficio propio, sin depender para el éxito del ingrediente político?

En países como Estados Unidos, Alemania Federal, Japón, Taiwán, Hong Kong, la Inglaterra de Thatcher, Corea del sur y Singapur, a los hombres de negocios, a la clase gerencial se les considera parte del esencial vehículo por medio del cual la sociedad obtiene sus objetivos económicos en cuanto a prosperidad, casa y alimentos, vestidos y diversión. En las sociedades colectivistas como la venezolana de hoy en día, los empresarios son catalogados de especuladores y acaparadores, contra quienes el Estado debe mantener estrictos controles

y solo el Gobierno es fuente de prosperidad social. Esto ha significado un cambio en la mentalidad del ciudadano libre e independiente que acude al mercado para adquirir bienes y servicios por la mentalidad medieval del siervo a la espera de la caridad del príncipe.

A quien piense que estoy exagerando quisiera pedirle refrescara la memoria leyendo los discursos de nuestros mandatarios durante los últimos 15 o 20 años. El tema constante ha sido que el venezolano se merece una vida mejor y que ello será alcanzable a través de la acción gubernamental para lograr una más justa redistribución de la riqueza. Durante todos estos años, nuestros gobernantes se han empeñado en separar en la mente del pueblo venezolano la muy necesaria relación de causa y efecto que debe siempre existir entre esfuerzo y recompensa. Lo que no quieren darse cuenta los políticos es que la distribución de la riqueza solo puede ser más y más injusta cuando ella depende crecientemente de las fuerzas políticas y no de las impersonales fuerzas del libre mercado. El capitalismo, nombre inventado por los enemigos de ese sistema económico, funciona eficientemente solo cuando los gobiernos se empeñan en asegurar la igualdad de condiciones entre individuos y nunca la igualdad en los resultados para los grupos.

La concentración del poder económico en las manos de los políticos y funcionarios nunca había sido tan grande en la historia de Venezuela. El poder sobre la vida o muerte económica que ejerce hoy un burócrata de tercera categoría en Recadi, deja pálido al que ejercía algún ministro o presidente de estado en tiempos del general Gómez o del general Pérez Jiménez. Esto ha llevado a la ruina a miles de pequeños empresarios que no tienen los medios para cumplir con la permisología. Conozco una gran empresa venezolana que ocupa a 13 personas solamente para cumplir con los trámites en Recadi y es evidente que tal estado de cosas imposibilita la supervivencia del pequeño, a la vez que desestimula el ingreso al mercado de un competidor potencial.

Uno de mis principales argumentos en contra de los controles y de la permisología es que irremediablemte fomenta la concentración económica al dificultar la competencia. Los políticos dicen odiar los monopolios, pero no solo son los creadores de todos los monopolios estatales, sino que, además, a través de leyes y decretos de toda índole, hacen virtualmente imposible la supervivencia de la pequeña empresa. Demos solo cuatro ejemplos:

1) Que exista una sola tasa de interés bancario, tiende a concentrar los créditos entre empresas grandes que significan menores riesgos. Si el banquero no puede compensar el mayor riesgo con una mayor tasa de interés, presta solo a quienes pueden ofrecer buenas garantías y deja fuera al pequeño y al recién llegado, cuando la medida política de fijar una tasa única de intereses activos fue supuestamente para beneficiar al débil.

2) Decretos sobre salarios mínimos, bonos alimentarios y de transporte no afectan a las grandes empresas que tienen fuertes sindicatos, tabuladores y contratos laborales. El

descalabro es producido entre las más pequeñas empresas familiares y de los barrios que cuentan con insignificante capital de trabajo y cada aumento compulsivo en sus nóminas crea automáticamente mayor desempleo entre aquellos trabajadores cuya contribución personal no cubre el pago semanal sumado a las prestaciones sociales y a los aportes de la empresa al INCE y al Seguro Social.

3) Ya hemos visto cómo los cientos de decretos relacionados con el control de cambio y la repartición de dólares preferenciales discriminan contra el pequeño empresario que no puede mantener suficiente inventario para cubrir las tardanzas de Recadi, no cuenta con la habilidad política para agilizar los trámites ni con el respaldo financiero para que el banco emita frecuentes cartas de crédito. Al mismo tiempo, gracias a la intervención gubernamental y al caos de la deuda externa, no hace mucho que perdió el crédito que le extendía su proveedor extranjero y que el cuidaba con casi tanto empeño como el honor de sus hijas. Ahora paga sus importaciones de contado. Todo esto, desde luego, tiende a la concentración económica y a la desaparición de la pequeña empresa.

4) Como último ejemplo quiero mencionar la singular práctica del Ministerio de Fomento de exigir que las solicitudes de ajustes de precios sean canalizadas por los interesados a través de sus cámaras y asociaciones. Aunque parezca mentira, la burocracia ha obligado a los empresarios venezolanos que operan en una misma rama industrial a unirse, a intercambiar información, a ponerse de acuerdo en sus estrategias para poder subsistir en una atmósfera de creciente intervención. Lo que en Estados Unidos sería penado por las leyes "anti-trust", en nuestro país ha sido fomentado por un ministerio que no tiene derecho a utilizar ese nombre para casi nada más.

Como vemos, la mano muy visible del Estado metida en toda actividad privada distorsiona y encarece al máximo el desenvolvimiento de cualquier operación de índole económico. Esto claro, ha sido de gran estímulo al crecimiento de la economía informal que parece estarnos salvando de la confrontación social producida en otros países por la frustración, el hambre y la miseria.

Durante 28 años de democracia política, Venezuela ha avanzado por el camino que conduce inexorablemente hacia el totalitarismo económico. Ha llegado la hora de que los venezolanos exijamos a nuestros líderes políticos que recapaciten y se percaten del inmenso daño que le han hecho y le siguen haciendo al país. Ya basta de seguir empeñándonos en copiar fórmulas de desarrollo y de redistribución que han fracasado en todas partes del mundo.

Tenemos que enrumbarnos por el camino de la libertad individual y de la libertad económica, porque de nada nos servirá la capacidad de votar cada cinco años si se nos arrebata el derecho de votar todos los días en el mercado para adquirir los bienes y servicios que requerimos y

que éstos se mantengan a niveles de precios accesibles, mediante la libre competencia de productores y comerciantes independientes que ingresen y desaparezcan del mercado no gracias a costosos privilegios de orden político, sino a su habilidad de interpretar y servir los deseos del consumidor. Ese es el verdadero camino de libertad y de prosperidad.

Ahora bien, apenas se habla de libertad económica, saltan sus enemigos para decir que ello solo beneficiará a los grupos poderosos y que antes de considerar la restitución de las garantías económicas hay que promulgar leyes anti-monopólicas.

Estas son las voces que siempre piden mayor intervencionismo del Estado y que ignoran el hecho fehaciente de que los particulares no pueden crear monopolios a menos de que cuenten con apoyo político; que es la intervención la creadora y propulsora de monopolios y oligopolios a través de las barreras que impiden el acceso de nuevos empresarios a determinados mercados y a través de la dispensación selectiva de privilegios, permisos, cupos y licencias.

Tomemos el caso de los periódicos. En Caracas hay nueve periódicos diarios. Existe indudablemente una fuerte competencia por la preferencia del lector, lo cual va en beneficio del público, que decide diariamente cual periódico comprar, y de los anunciantes que toman sus decisiones publicitarias de acuerdo a la circulación y a la calidad del medio.

¿Cómo podría cambiarse la actual situación competitiva por un monopolio? Quizás alguno de nosotros quisiera ser el único periódico caraqueño y la única forma en que podría lograrlo sería convenciendo a las autoridades de que no es conveniente tal diversidad, que se están desperdiciando recursos y que solo la editora X se merece dólares preferenciales y la exoneración de los derechos de importación del papel porque su línea editorial respalda al Gobierno.

Ninguno de los otros ocho periódicos subsistiría mucho tiempo adquiriendo su papel con un sobreprecio de 200%, cuando éste solo insumo representa casi la mitad de los costos en una empresa periodística.

Actualmente el ingreso de nuevos competidores al mercado periodístico tiene sólo una limitación, de índole económica: la inversión requerida para la compra e instalación de una rotativa y solo el Estado puede bloquear el acceso de un nuevo competidor no concediendo la licencia para importar la maquinaria o imponiéndole trabas en la permisología que encarecerían exageradamente la nueva operación.

En aquellos casos en que el mercado es servido por dos o tres productores es fácil que se pongan de acuerdo para desanimar al nuevo competidor, pero aún así se requiere la

connivencia del sector político y un sistema legal que pone en manos del funcionario público el poder de vida o muerte sobre la nueva empresa.

En estos momentos se cierne una tormenta sobre la libertad de prensa en Venezuela. El Estado ha decidido que hay que invertir 400 millones de dólares en un molino para producir papel periódico, después de que El Diario de Caracas y El Nacional alertaran sobre los peligros que implica pasar al control del Estado la principal materia prima de los medios impresos, se han efectuado ciertos cambios en el proyecto que originalmente iba a ser propiedad absoluta de la C.V.G., mientras que recientemente se les ha ofrecido a los editores venezolanos una participación del 20% y otro 40% sería aportado por un socio privado extranjero para asegurar el "know-how" y una futura operación eficiente y despolitizada.

Pero aún quedan muchas dudas por despejar. ¿Se les concederá a los actuales editores una posición privilegiada frente a los nuevos periódicos que puedan fundarse en Venezuela en el futuro? ¿A qué precio aportará el Estado la materia prima proveniente de Uverito y la energía eléctrica del Guri? ¿Qué seguridad obtendremos de que un nuevo gobierno no cambiará las reglas del juego y de la participación accionaria? ¿Tratará el estado de controlar la participación privada a través de testaferros? ¿Qué pasará con los pequeños periódicos del interior que no se encuentran en capacidad de aportar dinero para comprar acciones?

La experiencia en otros países de América Latina donde el Estado ha participado en plantas papeleras ha sido funesta y el frecuente peligro con las compañías de capital mixto ha sido claramente descrito por mi amigo Manuel Ayau, rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala: "Las empresas mixtas ponen a disposición de los empresarios privados el poder político monopolizante, y a disposición del político la oportunidad de evadir las normas de probidad. Resulta así una alianza que le evita al gobierno regirse por las normas usuales que rigen el manejo de la cosa pública y le eliminan al socio privado los únicos factores que lo obligan a la eficiencia, cuales son, la competencia y el riesgo. La víctima de tal combinación es el consumidor, vale decir, la sociedad".

Comprendo que a una audiencia joven formada bajo el prejuicio de que el empresario es egoísta, especulador, acaparador y estafador por naturaleza y que el ciudadano requiere de la protección estatal contra tales malhechores, no es fácil ni aceptar ni asimilar las ideas que les expongo aquí hoy.

Yo no creo que el empresario es mejor persona que el funcionario público, pero tampoco creo en el caso contrario. Cada uno es motivado por sus ambiciones e intereses personales y su capacidad de hacer daño depende únicamente del poder que logre ejercer sobre los demás. En tal sentido, el poder que tiene el boticario o el bodeguero sobre sus conciudadanos es mínimo porque si no nos gusta su cara o su tienda acudimos a otra, pero ese no es exactamente

el caso del llamado servidor público, a quien tendremos en determinados casos que acudir, nos guste o no.

Permítame dar un sencillo ejemplo. Si usted pudiera obtener su licencia para manejar o su cédula de identidad en Supermercados Victoria o en el Cada ¿acaso se pegaría las largas colas en Tránsito y las caras amargas y suciedad y despelote de Identificación y Extranjería? Si hubiese competencia privada en la venta de pasaportes, ¿cree usted que ese cuadernito desteñido nos costaría 300 bolívares?

La diferencia entre el mercado y el gobierno es que si al primero se le deja funcionar libremente todas las transacciones son voluntarias, mientras que el sector público es el sector coercitivo de nuestra sociedad.

La intervención del sector coercitivo en la fijación de precios ha provocado una profunda distorsión a la economía venezolana y ha sido causa principal de la inflación. La distorsión se basa en que los recursos y la inversión dejan de ser canalizados en las direcciones que el ciudadano a través del mecanismo de los precios y de la demanda está pidiendo. Al ser un precio fijado por decreto, se elimina toda fluctuación y toda comunicación en el sistema económico. Ese precio se mantiene artificialmente estable hasta que evidencias de escasez obligan al funcionario a incrementarlo y entonces se hace en saltos grandes y bruscos, manteniéndose total rigidez hacia la baja. Es decir, los precios regulados nunca bajan, siempre suben.

No es ningún secreto que el marcaje del PVP por parte del fabricante ha eliminado virtualmente la competencia a nivel del detallista y es totalmente descabellado obligar a locales lujosos, que prestan una serie de servicios adicionales y que tienen costos más altos en alquileres y en nómina de empleados a operar con el mismo margen que otros establecimientos o desestimular el caso de los mayores costos de transporte cuando el detal se encuentra lejos de los centros de producción.

También notamos que el fabricante tiene mayor poder de negociación con las autoridades y que frecuentemente se pone de acuerdo con éstas para reducir los márgenes de los intermediarios, cuyos servicios son frecuentemente desconocidos por los burócratas. En el Ministerio de Fomento es notorio el gran poder de la Dirección de Industrias, mientras que la Dirección de Comercio es la hija de la panadera, a pesar de que el sector comercial emplea mucha más gente y requiere de menor inversión para la creación de cada nuevo puesto de trabajo.

Lo que pretenden ignorar los enemigos de la libertad es que lo que es correcto en su raíz, funciona bien. Los derechos del individuo y la libertad individual de tomar sus propias decisiones conforman un principio correcto e indiscutible. ¿Por qué hay creciente desempleo

y subempleo hoy en Venezuela? Porque la permisología, las inmensas trabas y costos en la creación de nuevas empresas y el desestímulo a la inversión que todo ello significa empuja al venezolano a convertirse en empleado y no en patrón y todas esas brillantes ideas que barajan los políticos sobre cogestión, sindicato único y estabilidad absoluta solo lograrían empeorar la situación actual.

Quizás para sorpresa de algunos de ustedes, les diré que no son las leyes laborales ni las inspectorías del trabajo, ni las tripartitas lo que logra mejorar el nivel de vida del venezolano. Si ese fuera el caso, la prosperidad alcanzada por nuestras masas de trabajadores sería impresionante, cuando lo que realmente nos impresiona hoy es el derrumbe de su nivel de vida. Lo que verdaderamente promueve en forma acumulativa el bienestar del ciudadano, en términos reales, es el aumento de los niveles de inversión, que a la vez aumenta la productividad del trabajador y la cantidad y diversidad de bienes y servicios que puede adquirir con los mismos bolívares.

La inversión no es más que el ahorro traducido en herramientas, maquinarias y fábricas. A su vez, el ahorro significa que alguien ha tomado la decisión de no gastar hoy la totalidad de sus ingresos, de sacrificar su capacidad de consumo. Para que la gente ahorre, es necesario tener confianza en la moneda y nuestra moneda vale hoy apenas una sexta parte del valor que tenía hace 46 meses.

Quien ahorró 1.000 bolívares de sus utilidades del año pasado, metiéndolos en un banco, tiene hoy unos 1.080 bolívares. Quien salió corriendo a comprar dólares y a guardarlos bajo el colchón, tiene hoy el equivalente a 1.825 bolívares, lo que quiere decir que la política cambiaria del Estado venezolano no permite actualmente la acumulación de ahorros en el país, que puedan canalizarse hacia la inversión y al aumento de la productividad. A esto, la respuesta estatista no sería dar más libertad sino dificultar o impedir la convertibilidad del bolívar, lo cual a su vez aceleraría su destrucción por medio del surgimiento de mercados negros.

Creo haber indicado en los términos más sencillos cómo se ha desestimulado la inversión privada, pero la realidad es mucho más grave. En la misma proporción en que el Estado aumenta su participación en el PTB, la inversión disminuye paralelamente por la creciente inclinación del sector público hacia los gastos corrientes que considera indispensable para ganar elecciones y la inversión estatal tiende a canalizarse hacia grandiosos proyectos, como la planta papelera, que le llenan el ego a nuestros césares democráticos pero que frecuentemente en vez de producir riquezas, producen pérdidas y el aumento del costo de vida de los venezolanos al sustituirse la importación de materias primas baratas por productos nacionales de mayor precio y sin competencia alguna. El resultado práctico de tales políticas se ha reflejado en la extravagancia pública y la miseria privada.

Todas las presiones sindicales y sus victorias en lograr aumentos salariales se convierten en victorias pírricas cuando las políticas gubernamentales están destruyendo, a mayor velocidad, el valor de nuestra moneda. La ganancia cambiaria de más de 300% que obtiene el Estado en la venta de dólares es insuficiente y se adelantan reformas a la Ley de Bancos y a la Ley del Banco Central con el fin de pasarle al Estado las fuentes de financiamiento con que tradicionalmente ha contado el sector privado y lograr que el instituto emisor pueda legalmente absorber todos los bonos y letras que al Fisco se le ocurra emitir, reemplazando con la maquinita de imprimir billetes la caída de los ingresos petroleros.

Es realmente bochornoso que en el parlamento se aprueben leyes que los congresistas no han leído y mucho menos entendido, gracias a una obsoleta Ley del Sufragio que hace de ellos representantes de los partidos políticos, en lugar de representantes de los ciudadanos que los eligieron. Hace pocos días Godofredo González pretendía, con toda naturalidad, que Rachadell renunciara a su senaduría porque ese curul era supuestamente propiedad de Copei. Tal exabrupto es indicativo de cómo los cogollos políticos han manipulado a nuestras instituciones y a nuestra democracia hasta lograr eclipsar las normas constitucionales de controles y contrapesos, diseñados originalmente por Montesquieu y por Jefferson para asegurar una verdadera separación de los poderes y el funcionamiento de un parlamento bicameral.

Así mismo como nuestra dirigencia empresarial está mucho más pendiente del corto plazo y del incesante cabildeo para mantener sus aranceles proteccionistas y lograr sus delegaciones, sus dólares preferenciales y demás privilegios que solo el Estado puede repartir en la Venezuela de 1986, la dirigencia sindical parece no querer percatarse de cómo el Gobierno le está metiendo descaradamente la mano en el bolsillo a cada venezolano. A raíz del descomunal aumento de los precios del petróleo en 1973 y de la estatización de nuestra principal industria en 1976 que logró, de un solo plumazo, concentrar todo el poder político y económico en las mismas manos, se disparó el valor del premio para los ganadores de las contiendas electorales y al incrementarse geométricamente el poder real del Ejecutivo Nacional, se disparó también la politización de la sociedad venezolana: de los gremios, de los sindicatos, de la educación, de los tribunales, de las policías y de los esfuerzos por penetrar las asociaciones de vecinos. Este es el verdadero significado del surgimiento del Estado omnipotente, del apabullamiento del individuo y del desprecio de los políticamente poderosos por los derechos constitucionales del ciudadano.

El significado en el ámbito económico de la total y completa politización de nuestras vidas ha sido que a menos de que contamos con la palanca o con el amigo en los corredores del poder que nos ofrezca convertirnos en su testaferro, es más atractivo y mucho menos arriesgado ser empleado que empleador. Esto tiende, desde luego, a la homogeneización de la población (otro objetivo político) y a la desaparición de la competencia. Los políticos y gobernantes, aconsejados por economistas marxistas, sostienen que la competencia no es

válida porque no es perfecta y para que haya competencia perfecta es necesario que cada firma sea tan minúscula que ninguna acción de su parte pueda influenciar al mercado. Y el segundo requisito es que todos los productos competitivos deben ser exactos y no diferenciados por marcas. En ausencia de tal perfección, según ellos, el estado debe intervenir.

En la mente del planificador y del funcionario, el tamaño de la firma en relación al mercado y las altas tasas de ganancia en ciertos productos son evidencias de la imperfección del mercado y requieren de la intervención del Estado en la reducción del tamaño de las empresas más grandes. El verdadero defensor de los consumidores diría: No, no las dividan, simplemente esperen, porque una vez que dejen de satisfacer al mercado se reducirán o desaparecerán por su propia cuenta.

El problema surge cuando la empresa, en su empeño de servir los deseos del consumidor para aumentar sus ventas y utilidades, choca contra el funcionario que tiene una visión diferente del interés público. ¿Por qué van a existir seis colores de neveras si las blancas enfrían igual? Ese es el tipo de mentalidad socialista que impidió que los venezolanos tuviesen televisión a color por una década. Ese es el tipo de intervencionismo que aumenta la brecha entre Venezuela y los países donde el consumidor y no el burócrata es el rey y donde los premios para quien predice los gustos y necesidades del consumidor son tan grandes que impulsan a los empresarios a desarrollar nuevos productos y nuevas tecnologías porque saben que su capacidad de hacerse ricos no dependerá de la decisión de un funcionario sino de la aprobación de cientos de miles de consumidores. Y su éxito atraerá a muchos otros productores, lo cual inducirá a la reducción de precios sin la intervención estatal.

Todos nos recordamos lo caro que eran las minicalculadoras y los relojes digitales cuando aparecieron. Solo personas adineradas podían comprarlos, pero debido a que los gobiernos de Japón y Hong Kong no le fijaron márgenes de utilidad a los fabricantes, muchos productores acudieron a ese nuevo mercado, algunos prosperaron, otros fracasaron, pero los precios bajaron porque los gobiernos no se metieron a regular precios ni a proteger puestos de trabajo impidiendo que las fábricas ineficientes cerraran.

En las palabras de Schumpeter: “La reina Isabel tenía medias de seda. El logro capitalista no consiste en proveer más medias de seda para las reinas, sino más bien en colocarlas al alcance de las muchachas que trabajan en fábricas, a cambio de un cada vez menor esfuerzo de su parte”.

Capitalismo significa libertad, significa innovación, significa la búsqueda constante de mejores métodos y mejores servicios para conseguir mayor penetración y mejores utilidades. El premio es el éxito en el mercado y si tal éxito depende de la acción gubernamental, todo se desmorona y el principal perdedor es el propio consumidor. El libre mercado es el mayor

estímulo y obliga a una gran disciplina. El verdadero papel del Estado es el mantenimiento de un marco legal que estimule la competencia, fomente el espíritu de empresa que es el recurso más escaso y valioso en el mundo moderno, asegure la igualdad ante la ley y obligue el cumplimiento de contratos voluntariamente pactados.

Mi fórmula para salir de la crisis es la antítesis de lo que está haciendo hoy el Gobierno Nacional. El principio básico que tenemos que promover es que se le permita al venezolano ambicioso la oportunidad de trabajar, ahorrar, invertir, producir, tomar sus propios riesgos y obtener una recompensa cónsona con su esfuerzo y con su aporte a la sociedad. Yo defino la regulación como una barrera impuesta entre el esfuerzo y la recompensa. Sin libertad económica la sociedad libre es un mito y si la lucha contra el monopolio va a ser dirigida contra quien diseña un mejor producto, expande su mercado y gana más dinero, estamos perdidos y nuestro país seguirá indefinidamente siendo miembro de este Tercer Mundo que tanto entusiasma a los planificadores, a los marxistas, a los colectivistas, a los fascistas, a los socialistas y a los intervencionistas.

Si ustedes me pidiesen que tratara de resumir en una sola frase mi exposición de hoy, les diría que la verdadera razón de ser y el único resultado posible de las medidas intervencionistas que impiden la eficiente operación del libre mercado es beneficiar a grupos de presión, por motivos de inmediata conveniencia política, y que ello se logra solo a expensas de los trabajadores y de los consumidores, o sea, de todos los venezolanos que no pertenecen a esos privilegiados grupos de presión.

Muchas gracias.

Discurso pronunciado ante la Cámara de Industriales del Zulia, en Maracaibo, el 25 de noviembre de 1986.

Tomado de Monografía CEDICE N.º 13.

Libertad económica

por Carlos Ball

Recuerdo perfectamente la primera vez que asistí a un evento de esta Cámara. Fue hace ya 20 años. En aquel entonces era presidente Fred Eaton, el hombre de Sears, quien tantos buenos recuerdos dejó en Venezuela. No se trataba aquel día de agosto de 1965 de una reunión general como la de hoy, sino de un almuerzo con la junta directiva de la Cámara, al cual asistimos varios de los promotores del diario "La Verdad", para contarles sobre nuestro proyecto periodístico a los representantes de tan importante sector empresarial. Vivíamos entonces tiempos muy difíciles en Venezuela. Nuestra democracia no se había logrado todavía consolidar y el enemigo común eran los admiradores y seguidores de Fidel Castro, quienes veían en la subversión el camino más corto hacia la utopía socialista.

Veinte años más tarde, Fidel Castro sigue culpando al imperialismo yanqui de los ingentes problemas económicos de Cuba y 4.800 millones de dólares al año en ayuda económica soviética, resultan insuficientes para movilizar una economía en estado comatoso, aplastada por el peso de la burocracia, la ineficiencia bizantina del poder de decisión centralizado y la ausencia total de estímulos e incentivos individuales. Castro, hoy convertido en abuelo y con el mismo tiempo en el poder que el dictador Juan Vicente Gómez, perdió su carisma, aun frente a los enemigos profesionales de Estados Unidos, quienes lo veían con admiración por habérsele enfrentado al gigante del Norte. Pero a esos mismos ilusos, después de adorar desde los años universitarios al fetiche socialista, no les es posible hoy en día diferenciar el cruel totalitarismo ruso de la versión tropicalizada y del nuevo modelo nicaragüense, con unos comandantes que están muy lejos de irradiar el fantasioso encanto con que el Che Guevara envolvía a una juventud romántica y novelera de una generación atrás.

En 1985 nuestros problemas son de otra índole. Bajo el estándar latinoamericano, nuestra democracia es madura. Nuestras libertades políticas son envidiadas por la mayoría de los países del hemisferio. La amplia libertad de expresión de que gozamos es la mejor garantía de la estabilidad de nuestras instituciones y cuando sale algún político a quejarse de las críticas recibidas bajo el argumento de la conspiración ideológica, nadie le hace ya mucho caso. Pero, así como en cuanto a nuestras libertades políticas los venezolanos nos sentimos ufanos y satisfechos, en lo relativo a nuestras libertades económicas, no solamente no hemos logrado avanzar, sino que los políticos –para incrementar el poder discrecional del Ejecutivo- ni siquiera han respetado la Constitución, utilizando las repetidas crisis económicas, que sus mismos errores han provocado, como excusa para no restituirle al ciudadano las garantías económicas previstas en nuestra Magna Carta, lo cual mantiene al sector privado desprovisto de la seguridad jurídica que es requisito indispensable para la restitución de la confianza y para la tantas veces anunciada reactivación económica.

El merecido regocijo cívico que nos produce la consolidación de nuestras libertades políticas, ha sido explotado al máximo por la publicidad del Estado y de los diferentes partidos,

logrando crear en la mente del ciudadano común, la idea de que la libertad es un valor perfectamente divisible y que lo importante dentro de tal concepto es la libertad política, mientras que la libertad económica es algo que desean los ricos y los empresarios para que los bondadosos funcionarios públicos se vean imposibilitados de proteger al pueblo.

Aquí es exactamente donde nosotros, los empresarios, hemos fallado estruendosamente. Mientras los políticos acuden regularmente a nuestras agencias de publicidad, a nuestros expertos en relaciones públicas y en mercadeo, y a nuestros medios de comunicación para que le vendamos al electorado sus ideas y sus candidatos; nosotros, por el contrario, nunca hemos logrado unir esfuerzos ni recursos para vender nuestra propia ideología de libre iniciativa y de economía de mercado. Siempre hemos estado demasiado ocupados con los pequeños-grandes problemas de nuestras empresas para dedicarle el esfuerzo necesario y constante que significa, no sólo contrarrestar la acción propagandística de los enemigos de la libre empresa, sino convencer al gran público, a la gran masa de ciudadanos, primero, que ellos pertenecen al sector privado de la economía, el cual genera 70 por ciento del empleo en Venezuela, y segundo, que la razón de ser de la empresa privada es ofrecer mejores servicios y mejores productos para que todos alcancemos un mayor bienestar y que en esto somos mucho más efectivos que el Estado. No hemos logrado dar a entender que sólo bajo la economía de mercado se vive una democracia cotidiana, donde el ciudadano no tiene que esperar cinco años para votar, sino que, por el contrario, premia o castiga todos los días del año, con el mero hecho de adquirir tal o cual marca o preferir este o aquel servicio en lugar de otros bienes competitivos que, por no satisfacer sus deseos personales, son ignorados y rechazados.

La gran mayoría de los pequeños empresarios, tales como los microbuseros, carniceros y bodegueros, que trabajan por cuenta propia, al igual que el creciente sector informal, no se sienten identificados con el sector privado. No les hemos logrado proyectar el mensaje de que ellos y nosotros tenemos muchos intereses en común y que ambos, en mayor o menor grado, somos víctimas de las trabas de la permisología, de los funcionarios ineptos, de las malas leyes y de la corrupción administrativa.

El mes pasado asistí a un seminario realizado en México y auspiciado por el Fund for Multinational Management Education (FMME) sobre la economía informal en América Latina. Lo que más me impresionó fue, primero, el inmenso arraigo de las fuerzas del mercado en este dinámico y creciente sector, donde encontramos que el pueblo -en forma espontánea- ha elegido un incipiente y autóctono sistema capitalista. Los políticos podrán propagar sus ideas colectivistas y cooperativistas, pero la gente pobre sabe intuitivamente, que lo que funciona y lo que premia sus esfuerzos individuales es el mercado. En segundo término, me impresionó mucho constatar que la causa fundamental de la explosión del sector informal en los 14 países latinos representados en el seminario, es exactamente la misma: el alto costo de ingreso y de permanencia que le significa al microempresario informal, la

permisología y el cumplimiento con un marco legal anacrónico diseñado para perjudicar más que para amparar y que lejos de ser el resultado de las necesidades prácticas del hombre de hoy, es la consecuencia de la combinación de nuestra herencia autoritaria española -450 años de tradición mercantilista- con las elucubraciones de políticos sin ninguna experiencia empresarial exitosa.

El control de los hombres

Al mismo tiempo, la animadversión que los empresarios sentimos por los controles de precios no es algo gratuito y sin base. Es que los políticos no logran entender que, en todo intercambio, libre de coerción, ambas partes se benefician. Un concepto tan simple como éste no es captado por gente que en su proceso mental mercantilista cree sinceramente que todo intercambio significa que alguien se beneficia en la medida de que el otro se perjudica y como se considera que la parte débil es el consumidor, ello obliga al funcionario público a defenderlo de la avaricia especulativa del empresario, dándole a ese funcionario el poder que no le corresponde. Pero tan pronto como interviene alguna influencia externa, el comprador o el vendedor, o ambos, terminan perdiendo, ocasionándose un desestimulo que tiende a aumentar los precios y a reducir el bienestar general. Por eso es que sostenemos que todo control de precios, toda interferencia burocrática, tiende a reducir la oferta, a fomentar la inflación y termina perjudicando principalmente a quienes se pretende proteger.

Es a través del afán por regular, prohibir, ajustar, pechar, subsidiar, afinar, sancionar, orientar, estabilizar, proteger y dirigir al mercado, que los gobernantes logran entorpecer las acciones voluntarias de la gente, obligándolas a realizar intercambios de manera prescrita por terceros, que presumen de conocer mejor los intereses individuales de los propios participantes en la transacción. La regulación económica y el control de precios no es más que el control de los hombres, apoyado en la fuerza bruta del Estado.

Parecen no recordar los planificadores y reguladores, que los individuos coercionados a actuar en contra de sus propios intereses, por culpa de las regulaciones. Son parte del mismo público a quien ellos dicen beneficiar a través de los controles del Estado.

En una economía libre, por el contrario, el precio de cualquier producto será aquel donde la oferta sea equivalente a la demanda. Si el precio es menor al de equilibrio, la mayor demanda hará que aumente, pero si el gobierno lo mantiene artificialmente bajo, más compradores serán atraídos y algunos vendedores desaparecerán, con los resultados inevitables de la aparición de largas colas, escasez, racionamientos y mercados negros, con todos los costos escondidos que tal situación conlleva. Por otra parte, un precio fijado por el Gobierno artificialmente alto, impedirá a los vendedores colocar la totalidad de su producción, lo cual también conduce a despidos y a cierres de fábricas, estimulando, además, el surgimiento de

monopolios. El problema es que los millones de transacciones que ocurren cada día varían de acuerdo a las circunstancias y a las percepciones individuales de la gente. Todo lo que pasa en un extremo del mercado tiene algún grado de influencia en el resto de las operaciones, siendo totalmente imposible que los funcionarios, sin un interés personal en lo que sucede y sin posibilidad de tener la información conocida por los especialistas en diferentes tipos de transacciones, puedan regular inteligentemente el funcionamiento de algo tan complejo y tan dinámico. El daño que su intervención produce a la economía es incalculable, porque la fijación artificial de los niveles de precios mismos, los cuales entonces dejan de transmitir un mensaje confiable sobre los costos involucrados, el racional y eficiente uso de los recursos y la tendencia de la demanda. Se pasa de un espontáneo, equilibrado y sofisticado sistema perfectamente interconectado que incentiva la eficiencia y la minimización de los costos a un sistema politizado de golpes y porrazos, donde cada grupo de presión jala para su lado, donde resulta más fácil y mucho más barato convencer o comprar a un funcionario, que reducir los costos y mejorar la calidad, para satisfacer a todo un mercado.

Responsabilidad de quien dicta leyes que estimulan la Corrupción

Frecuentemente oímos decir que es tan culpable el que pagó como el que recibe la comisión, pero no se les ocurre concluir que el más culpable de todos es quien dicta las reglas del juego, que hacen posible y terriblemente atractiva la compra de privilegios, de dólares preferenciales, de licencias, de delegaciones o de una protección arancelaria. En ese caso, la habilidad no tiene nada que ver con servir al mercado, todo lo contrario, se trata de usar la permisología y las trabas impuestas por el Estado para vender más caro y sin competencia, aprovechándose de los desabastecimientos y monopolios creados o amparados por la misma acción gubernamental.

De esta manera hemos logrado tergiversar totalmente la función del Gobierno, cuya principal tarea económica tendría que ser no permitir el entrabamiento de las fuerzas naturales del mercado, atacando los monopolios que traten de impedirle el libre acceso al mercado de nuevos empresarios que hayan detectado altas ganancias en áreas con fuerte demanda e insuficiente oferta. Como bien lo decía Ludwig Von Mises hace 40 años: “Aquellos que luchan por la libre empresa y libre competencia, no defienden los intereses de los ricos de hoy. Ellos quieren que se le dé libertad de los ricos de hoy. Ellos quieren que se les dé libertad a los desconocidos que serán los empresarios de mañana, cuya ingeniosidad hará más agradable la vida de generaciones venideras. Ellos quieren que se les abra la puerta a mayores mejoras económicas… Ellos son los defensores del progreso”.

Señores, yo pienso que el peor negocio que se ha hecho en la historia de Venezuela, durante los 174 años de vida republicana, fue cambiar la inversión de las empresas petroleras multinacionales por los préstamos multimillonarios contratados para financiar elefantes blancos y para subsidios graciosos al consumo que sólo tenían motivación política y electorera. Pero gracias a la eficacia de la maquinaria publicitaria del Estado, los héroes populares son los que hipotecaron el futuro de nuestros hijos y los que durante diez años fomentaron la elefantiasis de nuestro sector público, que pasó de una magnitud de 15 por ciento hasta 55 por ciento del producto territorial bruto venezolano, índice propio de economías socialistas. Los gastos corrientes del sector público, como porcentaje del PTB, saltaron de 18,2 por ciento en 1974 a 39,5 por ciento en el año esquizofrénico de 1982. Pero los malos de la partida seguimos siendo los que arriesgamos capital, los que cada día debemos dedicarle más tiempo para cumplir con la permisología, los que aspiramos a obtener una rentabilidad sobre el patrimonio de los accionistas, los que tenemos que ingeniarnos cada 15 y último de mes para pagar sueldos y para producir todos los días bienes y servicios suficientemente atractivos necesarios para que el consumidor, por voluntad propia, se meta la mano en el bolsillo y los compre libremente.

En una democracia, las batallas se libran a nivel de la Opinión pública

Con qué frecuencia me llaman al periódico amigos míos para criticarme lo dicho por fulano o por zutano en tal columna, o lo distorsionado de la declaración de éste o aquel funcionario que para ganar las palmaditas de su jefe en la pirámide burocrática o de sus compañeros de partido, entorpece las actividades comerciales, perjudicando no sólo al empresario, sino que también al consumidor, a quien supuestamente desea favorecer. Entonces le digo, bueno, escribe tú un artículo desmintiéndolo o te mando a entrevistar para que des a conocer claramente la verdadera situación. ¡Ah no! mi amigo no tiene tiempo. Está muy ocupado o no quiere echarse encima al funcionario, porque depende de éste para otras muchas cosas.

En otras palabras, los únicos culpables de la mala imagen de los empresarios en Venezuela somos nosotros mismos, que no hemos querido o no hemos sido capaces de transmitir nuestra firma convicción de que el único sistema que asegura el desarrollo económico sostenido y el acumulativo mejoramiento del nivel de vida de la ciudadanía, es el sistema capitalista, basado en la propiedad privada, en la economía libre de mercado y en la libertad de escogencia por pate de todos los miembros de la sociedad.

Hace 20 años, cuando infructuosamente trataba de levantar un periódico que editorialmente defendía el concepto global de la libertad individual ante la arremetida de los ataques ideológicos de nuestros contendores y después de hablar entusiasmadamente sobre lo que

estábamos tratando de hacer, mi cliente potencial se arrellanaba en su sillón y me decía: "Oye, qué bueno Carlos, pero háblame más bien del costo por mil". Esa, desafortunadamente, ha sido la actitud generalizada de nuestra clase empresarial. No se dan cuenta que en una democracia las batallas se libran a nivel de la opinión pública. El Titanic chocó y está en peligro de hundirse, pero yo estoy negociando secretamente con el funcionario de la cubierta para que me permita tener mi silla de extensión con buena vista y no estoy dispuesto a hacer nada que me vaya a perjudicar con tan importante burócrata. Yo pensó y así lo he dicho en varios de mis artículos de prensa, que, con la salida de las empresas privadas petroleras, los venezolanos perdimos una excelente escuela de administradores, contadores, auditores e ingenieros. Muchos de los exitosos hombres de empresa de hoy aprendieron métodos y disciplina en la Creole, en la Shell, en Mene Grande, Mobil y Texaco. Me preocupa lo que va a pasar cuando desaparezca la presente generación de ejecutivos petroleros formados bajo una eficiente cultura multinacional y caigan las operadoras bajo la influencia corrosiva de la mentalidad burocrática del funcionario. Con la nacionalización de las petroleras, el sector privado perdió un importante aliado, que, por la magnitud y naturaleza de sus operaciones, veía las cosas a largo plazo. Hoy en día, los gerentes de las empresas norteamericanas vienen por tres o cuatro años a Venezuela, un país de mediana importancia dentro de las operaciones de su compañía, no de primordial categoría como era el caso para las petroleras y, por consiguiente, significa sólo un peldaño en la escala de promociones, lo que hace indispensable obtener resultados palpables e inmediatos.

Yo fui empleado de una multinacional que quizás algunos de ustedes hayan oído mencionar, la General Motors. Por consiguiente, conozco un poquito la mentalidad de quienes en la planta de Antímano llamábamos "The Home Office personnel". Creo que esa pasantía de 3 años fue para mí también una experiencia educacional importante. Pero si alguna idea logro dejarles hoy, quisiera que fuese una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad, con R mayúscula, que todos los aquí presentes, tenemos en cuanto a la defensa de los principios básicos que le permitirán a nuestras empresas funcionar eficientemente aún después de que nosotros no estemos aquí, para ofrecer los bienes y servicios que nuestros clientes requieren, asegurar un futuro próspero a nuestros empleados y proveedores y permitir la generación de riqueza que hará posible que el negocio crezca y que le siga resultando interesante a los inversionistas, a mediano y largo plazo.

Necesitamos inversión extranjera

Para que eso sea posible, tenemos que modificar la atmósfera intervencionista que se vive en Venezuela. Todos los días oímos a otro político más decir que necesitamos inversión extranjera. Pero los buenos deseos son insuficientes si no se estimula e incentiva al capital para que la inversión en Venezuela sea, por lo menos, tan atractiva como lo es en muchos

otros lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos, donde por primera vez en varias décadas, gobierna un equipo dispuesto a reducir el rol del Estado y a estimular el surgimiento del espíritu empresarial.

El texto del nuevo reglamento de inversiones extranjeras parece ser un primer paso en la dirección correcta, dándosele mayor flexibilidad al movimiento de capitales. Pero es un paso pequeño y tímido. Si realmente buscamos cambiar la imagen que Venezuela ha proyectado al exterior durante los 11 años en que hemos activamente ahuyentado al capital extranjero, tenemos que ser mucho más agresivos y radicales. El inversionista privado, de cualquier nacionalidad, busca la seguridad y rentabilidad de su inversión, por lo cual no podemos pretender atraer capitales en montos significativos mientras cada nuevo funcionario pueda cambiar o interpretar a su manera las reglas de juego y mientras no desmantelemos el actual atosigante aparataje de regimentación económica.

En todo lo relacionado al Pacto Andino y a la interpretación de la Decisión 24, Venezuela ha sido más papista que el Papa. Mientras las delegaciones de los demás países andinos se han preocupado en defender los intereses de su sector privado, en nuestro caso han sido los funcionarios públicos y los ejecutivos de las empresas del Estado, quienes han llevado la voz cantante en las negociaciones, logrando ventajas para las exportaciones de las industrias básicas estatizadas a costa del sector privado y del consumidor venezolano.

Empresas afiliadas a la Cámara Americana operan en casi todos los países y, por lo tanto, tienen a su alcance la más rica y completa información económica de lo que sucede en el mundo. Bien valdría la pena iniciar un flujo informativo sobre las políticas de inversión que se llevan a cabo tanto en las naciones que están obteniendo éxito en su desarrollo, como en las otras que siguen culpando de su atraso a las viejas potencias colonizadoras e imperialistas. En esto podrían participar las otras cámaras binacionales, de manera de llevar al conocimiento del liderazgo político, de la opinión pública y de los organismos cúpulas del empresariado, un verdadero panorama de nuestra posición en el mundo económico actual, para que se puedan desarrollar estrategias con el fin de poner a Venezuela a competir y a atraer nuevamente inversiones extranjeras.

Quizás les sorprenda saber que, a nuestra última Asamblea de Consecomercio, realizada en Ciudad Guayana en abril, fueron invitados y asistieron como observadores, los agregados comerciales de varias embajadas de países amigos, incluyendo a Richard Ades, de la embajada americana. Los dirigentes del sector comercio estamos convencidos de que, con mentalidad ultranacionalista, autárquica y estrecha, no alcanzaremos el desarrollo del país ni el bienestar de nuestro pueblo.

Nunca había sido tan propicio el momento para que se produzca un beneficioso cambio en el tratamiento de las inversiones extranjeras. La búsqueda del desarrollo a través de cuantiosos

créditos externos, resultó en un aparatoso fracaso en todos los países que tomaron tal camino y, gracias a Dios, a Venezuela se le secaron las fuentes de financiamiento público. La situación de los precios del petróleo sigue débil y el gobierno está consciente de que por sí sólo y con decretos, no podrá cambiar la preocupante tendencia de los niveles de desempleo, lo cual puede convertir a la CTV en un inesperado aliado. Y si estamos convencidos de que trabajamos por el bien del país y de que nuestra filosofía capitalista es la correcta, debemos despojarnos de esa timidez tradicional y darles la pelea ideológica a los enemigos de la libertad.

Es imprescindible que ustedes se acerquen más a nosotros, pertenezcan y participen en las cámaras regionales y en las asociaciones sectoriales, donde tendrán mucho que aportar y, al mismo tiempo, ayudarán a fortalecer al movimiento empresarial privado, que, a fin de cuentas, será su mejor aliado y el único capaz de asegurarles su permanencia en este mercado. Los verdaderos empresarios sabemos que a la inversión extranjera se le debe dar exactamente el mismo tratamiento, en aquellas áreas abiertas al capital foráneo, que el recibido por el inversionista criollo. La función del Gobierno es vigilar que la gandola no atropelle a la bicicleta y que ambos tengan libre acceso a la carretera.

El zapatero remendón piensa que no tiene nada en común con una gran empresa norteamericana y ésta se siente poco identificada con una pequeña compañía criolla. Pero todos somos elementos importantes del sector productivo del país y nuestro futuro depende de lo unido que luchemos para defender nuestro derecho al trabajo y al disfrute de nuestra propiedad. Hay algunos que creen en la libertad de empresa cuando ésta se le aplica a los demás mientras que para sí aspiran todos los privilegios y protecciones que el Estado les pueda brindar. Tales personas sufren de la misma mentalidad mercantilista de nuestros burócratas; son en realidad pseudo empresarios y los peores enemigos del sistema capitalista. En segundo término, están los tímidos, que se avergüenzan de llamarse a sí mismos capitalistas. Los que siempre le están buscando la justificación social a su actividad económica, ganando indulgencias con su filantropía, lo cual seguramente es muy loable, pero no tiene nada que ver con la verdadera justificación social de su negocio, que sigue siendo producir más y mejor, usando un mínimo de recursos y maximizando la rentabilidad de la inversión; es decir, sirviendo mejor las necesidades del consumidor.

En el excelente y recién publicado libro The Spirit of Enterprise, George Gilder escribe en su último capítulo: “Empresarios que atesoran su riqueza o buscan la protección del Gobierno contra sus rivales o alardean de un consumismo exagerado o se retraen hacia un egoísta aislamiento, traicionan la esencia misma de su rol y de su responsabilidad en el mundo. En tal grado, dejan de ser empresarios o capitalistas, convirtiéndose en reliquias de las sociedades estáticas y feudales de la era precapitalista”.

Centro de divulgación del conocimiento económico

Otra obligación que tenemos los empresarios es prepararnos adecuadamente para defender en cualquier terreno los evidentes beneficios del capitalismo. Esta no es una pelea fácil. Muchos de los profesores, no solo en Venezuela sino en algunas de las más conocidas universidades del mundo, son adversarios del capitalismo y ven en el estatismo keynesiano y cepaliano, la única solución a los problemas sociales. Hay una nueva generación de maestros jóvenes que no piensan así, pero éstos son todavía una pequeña minoría y mientras tanto, nos toca a nosotros combatir la predominante indoctrinación que recibieron nuestros empleados y que están recibiendo nuestros hijos en las escuelas tanto públicas como privadas. Esto requiere tiempo y esfuerzo. También es una labor cuyos resultados no se verán a corto plazo. Y aquí quiero aprovechar el tema para contarles muy brevemente lo que un grupo de empresarios venezolanos iniciamos recientemente. Se llama el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), una institución sin fines de lucro, en la cual ofrecemos un programa de conferencias sobre la economía de mercado y al mismo tiempo, distribuimos libros de los más destacados ideólogos de la libertad.

Mientras nuestras librerías, respondiendo a la demanda creada por los profesores, se encuentran atestadas de libros marxistas, hasta hace pocos meses era prácticamente imposible conseguir en Venezuela libros de Hayek, Von Mises, William Simon, Hazlitt, Aynn Rand, Benegas Lynch, Murray Rothbard, Milton Friedman, Wilhem Roepke, George Gilder, James Buchanan, Henri Lepage, George Stigler, Israel Kirzner, Frank Knight y de tantos otros defensores de nuestra filosofía. Eso cambió y hemos sido gratamente sorprendidos, porque en los primeros siete meses de vida de CEDICE estamos vendiendo un promedio superior a los 45 mil bolívares mensuales en un país donde se cree que a la gente no le gusta leer o no tiene tiempo para hacerlo.

A todos los aquí presentes hoy los invito a afiliarse a CEDICE, llenando con su nombre o el de su compañía el cupón del folleto que tienen en sus mesas, colaborando así con este proyecto un poco romántico y a largo plazo que significa mostrarle a la gente que hay un mundo mejor y que nuestro camino no es el de servidumbre, aquel que nos lleva derecho al Gulag o al 1984 de George Orwell, sino el camino de la libertad y del respeto a los gustos y derechos del hombre como individuo, no como un elemento insignificante de una masa amorfa y engatusable por los slogans inventados por los socialistas.

Con mi intervención de hoy quiero buscar un mayor acercamiento entre los empresarios extranjeros establecidos en este país y los empresarios venezolanos. Ambos grupos defendemos una causa común -la libre iniciativa sin la cual nuestros esfuerzos seguirán dependiendo de la discrecionalidad de individuos de paso por un cargo público y que aún con las mejores intenciones, entorpecen el óptimo funcionamiento del mercado, añadiendo

costosas trabas que termina pagando el consumidor con incrementos en los costos o con la desaparición de bienes y servicios a los cuales tiene derecho. Busco el ingreso de nuestros colegas extranjeros a una gran alianza empresarial para que difundamos las ideas sobre la libertad y presentemos un sólido frente organizado en contra de la corrupción, la permisología y el intervencionismo del Estado. Aquí quiero citar al legislador y poeta ateniense Solón, conocido como uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, quien mantenía que "un pueblo tendrá justicia cuando todos se opongan y protesten por cualquier atropello a derechos de terceros como sí ellos mismos fuesen los atropellados".

La Cámara Americana ha demostrado gran eficiencia a través de los años. Sus diferentes comisiones trabajan con vigor y regularmente alcanzan los objetivos que se trazan. Quiero, entonces, hacer una recomendación concreta, en el sentido de que se nombre una comisión de doctrina de la libre iniciativa privada y que sea responsabilidad de tal comisión coordinar esfuerzos con otras cámaras y asociaciones para lograr un mayor acercamiento con los empresarios venezolanos.

Tomado de Monografía CEDICE N.º 4. Publicada en julio de 1987.

¿Por qué América Latina no progresa en un mundo donde

otros lo están logrando?

Por Carlos Ball

Agradezco a la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia esta invitación a que les hable sobre por qué América Latina no progresa, haciendo énfasis en el caso venezolano. Muchos de los problemas y obstáculos que han impedido que nuestro hemisferio se incorpore al mundo desarrollado de Occidente son comunes o, al menos, bastante parecidos en toda América Latina.

Luego de 16 años al frente de AIPE (www.aipenet.com), una empresa periodística dedicada al análisis y discusión de los principales temas económicos y políticos que afectan a la región, estoy convencido de que a menudo comprendemos mejor lo que sucede en nuestro propio patio cuando observamos el desarrollo de problemas similares que confrontan países vecinos y demás regiones de América Latina.

Mi experiencia personal

Voy a comenzar contándoles brevemente unas pocas experiencias personales que creo reflejan algunos de los males que en diferentes grados han afectado a gran parte de América Latina.

Poco después de la muerte de mi hermano Luis Henrique, leyendo papeles suyos me encontré una historia fascinante que me hizo comprender mejor lo que el economista austriaco Friedrich Hayek llamó "el camino de servidumbre", sendero predilecto de los gobernantes venezolanos. Mi hermano, quien era 9 años mayor que yo, relata su visita a nuestra madre en la clínica, en 1939, cuando yo nací. Cuenta que al entrar al hospital saludó a una muchacha que salía con su recién nacido en los brazos. La reconoció como trabajadora de la fábrica de nuestro padre y me enteré que, en aquellos tiempos, esa empresa pagaba el 95% de los gastos médicos de todos sus trabajadores, quienes recibían atención médica en la Policlínica Caracas, entonces el mejor hospital privado del país.

Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando, por presiones del Departamento de Estado, se creó en Venezuela el Instituto de Seguros Sociales para comenzar a socializar la medicina y centralizar las jubilaciones. Entonces, las Naciones Unidas recomendaron al médico chileno Salvador Allende para que asesorara al gobierno venezolano en la creación de ese instituto. Los impuestos a las nóminas de sueldos que seguidamente impuso el gobierno nacional hicieron que pronto desaparecieran todos los programas privados de atención médica a los trabajadores y sólo aquellos venezolanos con altos ingresos pudieron desde entonces tener acceso a clínicas privadas.

Las buenas intenciones políticas a menudo causan males no previstos y como la prioridad absoluta del partido gobernante suele ser ganar las próximas elecciones, se dificulta y hasta se imposibilita que a tiempo se corrijan nefastos errores.

Las estadísticas muestran de manera dramática los cambios sufridos en Venezuela entre la generación de mis padres y la de mis hijos. Por ejemplo, en 1958 el ingreso per cápita del venezolano equivalía a 78% del ingreso per cápita en Estados Unidos. Mientras en la década de los años 50 el ingreso de los venezolanos aumentó en más del doble, a partir de 1960 — bajo una política económica que el propio presidente Rómulo Betancourt definió como "socialismo en alpargatas"— la población ha crecido más rápidamente que la economía.

Hoy, a pesar del precio récord del petróleo, el ingreso promedio del venezolano fluctúa alrededor del 15% del ingreso promedio en Estados Unidos, mientras que todo lo contrario ha estado sucediendo en países ex-comunistas como Estonia y la República Checa, al igual que en los llamados tigres y dragones de Asia.

Yo me gradué de una universidad americana en 1962 y recibí varias ofertas de trabajo para quedarme allá. No las tomé en serio porque para mí el futuro estaba en Venezuela. Pero apenas un par de décadas más tarde, cuando mis hijos se graduaron de universidades americanas, ellos no dudaron en quedarse a vivir en Estados Unidos. En Venezuela se notaba ya un cambio profundo; de ser un país floreciente y próspero que atraía a cientos de miles de inmigrantes de todas partes del mundo y donde gran cantidad de ejecutivos y técnicos de las multinacionales petroleras preferían quedarse a vivir después de su jubilación, se ha convertido en un país de emigrantes, exportador neto de talento y de capital privado. Las aplicaciones de venezolanos que quieren venirse a vivir en Colombia se dispararon 300% en los últimos dos años.

En Miami, así como en los años 60 se veían a médicos e ingenieros cubanos lavando ventanas y cortando la grama, hoy vemos a muchos venezolanos jóvenes y viejos tratando de rehacer allá sus vidas de la misma manera.

Para terminar con estas breves anécdotas personales, les contaré por qué vivo y trabajo en Estados Unidos desde hace 20 años. En 1987, yo era director general de *El Diario de Caracas*, cuya línea editorial era muy crítica del intervencionismo y desenfrenada corrupción

del gobierno del entonces presidente socialdemócrata Jaime Lusinchi. El periódico pertenecía al grupo Radio Caracas Televisión, cuya licencia de transmisión vencía en mayo de 1987. Los dueños de la empresa fueron entonces informados desde el palacio presidencial que la licencia no sería renovada a menos de que yo fuera despedido.

Cuarenta y ocho horas antes de ser despedido, una fuente cercana al partido de gobierno me informó que el ex presidente Carlos Andrés Pérez había dicho esa mañana, en la sede del partido Acción Democrática, que el problema conmigo ya había sido resuelto.

Fui despedido y la licencia de RCTV fue renovada por 20 años.

Dos días después de mi salida del periódico, mientras el presidente Lusinchi visitaba la redacción de *El Diario de Caracas* para celebrar su victoria y sonreído declaraba que "es pecado hablar mal del gobierno", lo cual apareció al día siguiente como titular de primera página, yo confrontaba falsos cargos en un tribunal penal, donde el juez Cristóbal Ramírez Colmenares me informó, sin titubear y apuntando al techo con un dedo, que él necesariamente tenía que seguir "instrucciones de arriba".

Decidí entonces emigrar a Estados Unidos y, poco después, habiendo el gobierno logrado lo que buscaba, se retiraron todos los cargos en mi contra.

Falta de respeto por las libertades civiles

Como todos ustedes saben, en mayo de este año se repitió la historia en Venezuela, pero con un final mucho más triste: Hugo Chávez no renovó la licencia de transmisión a Radio Caracas Televisión, canal que fue reemplazado por otra televisora más de propaganda gubernamental que, además, se apoderó de 130 millones de dólares en equipos y antenas de transmisión, sin pagar un centavo a los dueños.

Cuando no hay respeto por las libertades civiles ni los derechos de propiedad, surgen multimillonarios ganadores, mientras que los perdedores son aplastados, dependiendo de quién se ha ganado o comprado el apoyo oficial. Para ilustrar ese hecho y terminar con el triste caso de Radio Caracas Televisión, les cuento otra sorprendente coincidencia. Hace 20 años, Carlos Croes era el jefe de la Oficina Central de Información del presidente Lusinchi; es decir, su ministro de propaganda y censura. Hoy el Sr. Croes es vicepresidente de Información de Televen, uno de los canales privados de televisión que resultaron más beneficiados con el cierre de RCTV, empresa que a lo largo de 53 años fue el más exitoso medio publicitario venezolano.

Sí debo aclarar que no solamente Chávez y los presidentes de Acción de Democrática han sido enemigos de la libertad de prensa. El presidente copeyano Rafael Caldera me llamó públicamente "traidor a la patria".

Un artículo mío publicado el 22 de julio de 1994 en el *Wall Street Journal*, relatando las fracasadas políticas estatistas del gobierno venezolano, causó la furia del entonces presidente Rafael Caldera, quien en un discurso al día siguiente, en la Décima Convención Nacional de Periodistas dijo: "A mi me duele profundamente cuando veo venezolanos que llegan a adquirir la posibilidad de escribir o informar para órganos de prensa internacional... diciendo que Venezuela va al desastre, eso es una traición a la patria, ese es un crimen contra Venezuela. Creen que por hacerle daño a un gobierno tienen derecho a presentar toda una serie de infamias. Y yo espero que algún día el tribunal disciplinario del Colegio Nacional de Periodistas le dé una sanción moral expulsando a esos criminales que usan las columnas de la prensa extranjera para denigrar de Venezuela, para presentar un panorama negativo de nuestro país".

El presidente Caldera evidentemente ignoraba que en Estados Unidos no hay que ser miembro de ningún colegio de periodistas ni de ningún sindicato para escribir en la prensa, ya que la primera enmienda constitucional garantiza la libertad de expresión y de prensa.

En Venezuela y en muchos otros países latinoamericanos, la democracia que logramos tras la desaparición de las viejas dictaduras militares falló en garantizarnos el principal derecho humano: el derecho a ganarnos la vida en el trabajo de nuestra preferencia, para luego disfrutar libremente de la propiedad adquirida con nuestro propio esfuerzo.

El termómetro de nuestros recientes y actuales quebrantos estatistas, a la vez que el más confiable indicador del bienestar y crecimiento económico latinoamericano o, por el contrario, del aumento de la de corrupción, hambre y miseria es el grado de libertad de mercado que gozan nuestros países. Es decir, el nivel o cantidad de trabas burocráticas, permisos, aranceles, licencias, autorizaciones, cuotas, regulaciones, concesiones, franquicias, colegiaturas, sindicatos únicos y demás artificios con los que funcionarios públicos discriminan en contra del pueblo, impidiendo el libre acceso tanto al trabajo como al mercado y despojando a la gente de su más importante derecho civil, el de ganarse la vida haciendo lo que más les gusta, lo cual suele también ser lo que mejor hacen.

En nombre de la "justicia social"

En nombre de la justicia social, el gobierno venezolano anunció hace pocos días que se va a imponer por decreto una ley de Estabilidad en el Trabajo, bajo la cual nadie podrá ser despedido, trasladado de cargo o desmejorado en sus condiciones, sin la previa autorización del gobierno. Esta nueva normativa reemplazará la inamovilidad general que ha estado vigente desde el año 2003.

Con razón, la semana pasada el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Americana declaró a Reuters que "Chávez ha sido un gran promotor de la inversión extranjera en Colombia", refiriéndose al traslado de Caracas a Bogotá de las sedes de varias

empresas norteamericanas que temen las consecuencias del manifiesto colapso del Estado de Derecho en Venezuela.

El triste resultado del extremismo intervencionista lo muestran claramente las estadísticas de la Confederación Venezolana de Industriales: de 11.000 industrias que existían en Venezuela en 1998, quedan menos de 7.000 y el número de empleos perdidos en el sector industrial, en los últimos diez años, pasa de 500.000.

Por su parte, las estadísticas del gobierno muestran más bien una disminución del desempleo debido a que el número de empleados públicos ha aumentado 45% bajo la presidencia de Hugo Chávez. Sin embargo, más de la mitad de los trabajadores venezolanos forman hoy parte de la economía informal.

La avanzada socialista siempre enarbola la bandera de la "justicia social", cuya popularidad se debe en parte a que no tiene una definición clara y precisa. Cada político la define según conviene en el momento, para lograr apoyo a su proyecto de ley o la regulación de alguna actividad.

La expresión "justicia social" fue por vez primera utilizada por un sacerdote siciliano, Luigi Taparelli, en 1840 y pronto se la apropiaron las élites intelectuales que aspiraban conducir el mundo a la utopía del "socialismo científico", donde la razón y mentes privilegiadas regirían el universo. Ellos sabían mejor lo que a la plebe ignorante realmente convenía. Así, la "justicia social" desde temprano estuvo ligada a la economía dirigida y planificada. Según los políticos en ejercicio, el individuo importa poco vis-a-vis el bien común.

Al comienzo había mucho de buenas intenciones en el concepto de "justicia social", como por ejemplo que la gente acomodada ayudara a través de fundaciones caritativas privadas a colegios y hospitales, como también a la adaptación de campesinos a los nuevos centros industriales. Pero el profesor Hayek fue uno de los primeros en denunciar la "justicia social" cuando esta dejó de ser una virtuosa y bondadosa decisión espontánea y personal de ayudar al prójimo para convertirse en imposiciones —desde las alturas del poder— de un abstracto y manipulable ideal.

Se creó así una falsa imagen de la gente común como víctimas, ya que al haber víctimas tiene que existir un victimario.

El filósofo polaco Leszek Kolakowski, en su historia del comunismo, escribió que el paradigma fundamental de esa ideología estaría para siempre garantizado porque tu sufrimiento es causado por opresores y las cosas malas que te suceden no son culpa tuya sino de los ricos de tu país, o peor aún, de los ricos de ultramar. Claro, el remedio comunista, nazi y fascista para acabar con la injusticia social condujo a hambrunas, campos de concentración y cientos de millones de muertos, resultados infinitamente peores que el mal fantasmagórico inventado por intelectuales como excusa para detentar el poder.

En el tercer volumen de su obra titulada “Principales corrientes del marxismo” (publicado en 1978), Kolakowski escribe que “el marxismo actualmente ni interpreta ni cambia al mundo: es meramente un repertorio de consignas que sirven para organizar variados intereses”.

Según Hayek: “Una de las grandes debilidades de nuestro tiempo es que no tenemos la paciencia ni la fe para crear organizaciones voluntarias con los fines que valoramos, sino que de inmediato le pedimos al gobierno que utilice la coerción (o fondos sustraídos coactivamente) para cualquier cosa que parezca deseable para muchos. Sin embargo, nada tiene peor efecto sobre la participación ciudadana que cuando el gobierno, en lugar de ofrecer meramente la estructura esencial para el crecimiento espontáneo, se vuelve monolítico y se encarga de todas las necesidades, las cuales en realidad pueden sólo ser satisfechas por el esfuerzo común de muchos”.

Para Hayek, la justicia es siempre individual y “nada ha destruido más nuestras garantías constitucionales de libertad individual que el intento de alcanzar el espejismo de la justicia social”. El mercado premia a quienes mejor satisfacen los requerimientos y necesidades de los consumidores y manipular los premios significa fomentar la ineficiencia y la pobreza misma. Ya vimos con horror los logros de Stalin, Mao y Castro bajo el lema marxista “de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad”.

Hoy es políticamente incorrecto mencionar una triste realidad, que las dictaduras militares del pasado —a pesar de haber hecho mucho daño— a menudo tuvieron la ventaja de que los gobernantes de aquella época se contentaban con ejercer el poder político con mano dura, mientras que permitían amplia libertad económica a la ciudadanía. Algunos amigos del palacio presidencial disfrutaban, desde luego, de la concesión de ciertos y determinados monopolios y oligopolios, pero predominaba la libre competencia, importaciones sin cuotas ni aranceles y, sobre todo, un creciente flujo de inversiones extranjeras, lo cual no solamente mejoraba los niveles de salarios, sino que fomentaba la creación de una fuerza laboral calificada y productiva, que no aspiraba a vivir de las dádivas de los políticos, sino del sudor de su frente.

Los pilares del "socialismo del siglo XXI"

A fines de los años 50 había más inversión norteamericana en Venezuela que en todo el resto de América Latina. Y pienso que la mejor universidad que por muchos años tuvimos los venezolanos fue la Creole Petroleum Corporation, subsidiaria de la Standard Oil. Técnicos y administradores que escalaban posiciones en la Creole solían recibir las más atractivas ofertas de trabajo de parte de empresarios criollos que querían asegurarse de contar con gerentes y administradores competentes en sus empresas. Esa concentración del talento en la industria petrolera fue una de las razones del éxito petrolero venezolano, pero el lanzamiento del cartel

de la OPEP y la politización de nuestra principal industria pronto comenzaría a cambiar el panorama económico nacional.

Es importante recordar que la fundación de la OPEP, el 17 de septiembre de 1960, fue idea del entonces ministro venezolano de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien convenció a cuatro mandatarios del Medio Oriente a formar un cartel para asegurar así altos ingresos para los países productores de petróleo. En 1960, las exportaciones petroleras de Venezuela representaban 60% del comercio petrolero internacional, mientras que los países árabes exportaban a unas pocas naciones europeas.

En 1974, el presidente Carlos Andrés Pérez, quien había sido ministro del Interior de Rómulo Betancourt, procedió a estatizar la industria petrolera. Allí está la prueba de que la nueva clase política venezolana que surgió a raíz de la caída del régimen dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, no se contentaría con ejercer el poder político, sino que también ambicionaba el poder económico.

En 1961, el presidente Rómulo Betancourt anunció que no se otorgarían nuevas concesiones a las empresas petroleras extranjeras y éstas, lógicamente, comenzaron a repatriar sus capitales y a buscar otras áreas de exploración. Esto causó una gran presión sobre el bolívar, el cual sufrió entonces su primera devaluación del siglo XX.

Uno de los pilares fundamentales de toda economía floreciente es la solidez de su moneda. El bolívar venezolano, hoy convertido en miserable "chavito", mantuvo su valor de un gramo de oro a lo largo de 82 años, desde 1879 hasta 1961. Desde entonces, el valor oficial del bolívar con respecto al dólar ha caído 63.500% y su poder adquisitivo en más del doble de eso. Este es el verdadero termómetro del robo perpetrado por los gobernantes al pueblo venezolano. Y, como sabemos, los más afectados por la inflación no son los ricos con propiedades inmobiliarias y cuentas en dólares en el exterior, sino los más pobres que ven desaparecer sus pequeños ahorros.

Para financiar los crecientes gastos del estado, la clase política latinoamericana suele preferir la inflación al aumento de impuestos. Esta no tiene que ser aprobada por ninguna legislatura y afecta menos a los amigos del palacio presidencial. Lo que sí se requiere es la politización del Banco Central, lo cual en el caso venezolano ocurrió a mediados de los años 70, bajo el presidente Carlos Andrés Pérez. Desde entonces, el Banco Central de Venezuela ha sido utilizado para ganar elecciones imprimiendo billetes y la serie de frecuentes devaluaciones del bolívar fue comenzada por el presidente socialcristiano Luis Herrera Campins en 1983.

En la década de los años 50, la inflación en Venezuela era inferior a la de Estados Unidos. Por el contrario, en apenas el primer semestre de 1996, la inflación venezolana superó a la que habíamos experimentado a lo largo de 27 años, desde 1946 a 1973. Sin embargo, debo reconocer que los gobernantes venezolanos no han sido los más ladrones de América Latina. El Che Guevara, al ser nombrado presidente del Banco Central de Cuba por Fidel Castro en

1959, procedió a borrarle dos ceros al peso cubano y en Argentina le borraron 17 ceros a la moneda entre 1971 y 1991.

El tercer pié del trípode en que se apoyaría "el socialismo del siglo XXI" de Hugo Chávez fue la politización del sistema judicial. El general Marcos Pérez Jiménez tuvo un honorable ministro de Justicia, Luis Felipe Urbaneja, quien creó un sistema judicial regido por jueces honrados e imparciales. En el campo político se cometieron detestables injusticias durante la dictadura militar, pero eso no ocurría en los tribunales.

En 1969, el partido Acción Democrática perdió las elecciones presidenciales, pero mantuvo una mayoría en el Congreso, la cual utilizó para ponerle la mano al sistema judicial, a través de una ley que convertía el nombramiento de jueces en una función de los resultados electorales. Así se enterró en Venezuela el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, se politizó y se corrompió al sistema judicial, con el nombramiento de jueces según su afiliación política y en proporciones que reflejaran los resultados electorales.

La consecuencia casi inmediata de ese cambio en la selección de los jueces fue la compra y venta de sentencias. La gente influyente y los conocedores del medio sabían a cuáles abogados acudir en caso de cualquier problema legal, mientras que los venezolanos pobres languidecían en las cárceles por años sin ir a juicio. Según distinguidos abogados caraqueños, ya en los años 90 una orden de detención en las cárceles de Caracas podía equivaler a una virtual condena a muerte.

Es comprensible el culto a la democracia en una región del mundo que desde los tiempos de la independencia sufrió frecuentes y crueles dictaduras, pero como solía decir mi fallecido amigo, el brillante economista inglés Arthur Seldon: "no basta con implantar la democracia política. El mercado garantiza mejor la libertad de los ciudadanos".

La realidad es que la libertad económica suele conducir a la libertad política, como sucedió en Chile, pero la libertad política no conduce necesariamente a la libertad económica, como vemos en el triste caso venezolano y de muchas otras naciones del hemisferio.

No hay duda de que los ciudadanos disfrutamos de nuestra libertad política en importantes pero contadas ocasiones, al elegir a nuestros alcaldes, congresistas y presidentes cada cierto número de años, pero la libertad económica la ejercemos en infinidad de ocasiones todos los días de nuestras vidas.

La incongruencia de la filosofía política que prevalece en gran parte de América Latina es que nosotros, los ciudadanos, tenemos el derecho y estamos capacitados para elegir a los gobernantes y legisladores, pero ellos, una vez encargados del poder, son quienes determinan lo que podemos hacer o no con nuestras vidas y con nuestra propiedad, por lo que con inusitada frecuencia utilizan la excusa del bien común para aplastar nuestros derechos civiles y nuestra libertad individual.

La cultura anticapitalista

Pienso que la principal razón por la cual nuestro hemisferio no avanza hacia la prosperidad económica que están alcanzando muchos países de otros continentes, que solían ser mucho más pobres, se debe a que nuestros políticos y gobernantes no creen en gobiernos limitados. Como claramente lo expresaron hace más de dos siglos los próceres fundadores de Estados Unidos, la razón de ser del gobierno es la defensa de los derechos del ciudadano a la vida, a la propiedad y a la búsqueda de su felicidad.

Los países ricos quizás se pueden hoy dar el lujo de irrespetar tales principios fundamentales, aunque hasta los políticos franceses se están dando cuenta que cuando el gasto del estado de bienestar alcanza 54% de Producto Interno Bruto, desaparece el crecimiento económico y la gente joven emigra o vive de la caridad pública porque no consigue empleo, a pesar de la políticamente atractiva jornada laboral francesa de 35 horas a la semana.

En ese sentido, algunos de los tradicionales enemigos del verdadero bienestar latinoamericano forman parte, desde hace décadas, de las burocracias de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales. Tales voces se unen a las de reciclados burócratas latinoamericanos que antes imponían sus fracasadas ideas dirigistas en sus países de origen, mientras que hoy lo hacen desde envidiables cargos libres de impuestos y desde elegantes oficinas en Nueva York, Washington, Ginebra, París o Bruselas. La repetitiva fórmula suele ser más créditos a los gobiernos, más leyes, más regulaciones y más conferencias en los más deliciosos hoteles del mundo, donde discutir y negociar una más detallada planificación económica.

Ellos también se empeñan en tratar de imponernos las bonitas reglas de los países desarrollados, pero si estas mismas hubieran estado vigentes hace 100 o 200 años habrían logrado paralizar o destruir la Revolución Industrial, impidiendo la transición de economías agrícolas pobres a desarrolladas economías industrializadas y que hoy en día avanzan hacia economías basadas en los servicios.

Lamentablemente, la cultura latinoamericana del siglo XXI es anticapitalista porque la población ha sido convencida por nuestros locuaces políticos que el capitalismo promueve la desigualdad, mientras que sus bien intencionadas políticas públicas dirigistas y socialistas son capaces de reducir la pobreza, a través de más programas sociales y mayor redistribución de la riqueza.

Los tradicionales partidos políticos venezolanos, Acción Democrática y Copei, que antes se alternaban el poder, solían dedicarse a concentrar en sus manos el poder político y económico, dejándole prácticamente mano libre a la extrema izquierda en el campo educacional.

La sanguinaria guerrilla castrista fue derrotada militarmente en Venezuela hace años, pero muchos de sus líderes —con vista al largo plazo— se dedicaron desde entonces a cambiar la manera de pensar de la juventud, prestándoles especial atención a los jóvenes oficiales.

La educación pública promueve la idea de que la libertad es un valor perfectamente divisible y que lo importante es la libertad política, mientras que la libertad económica es algo que desean solamente los ricos y los empresarios para que los bondadosos funcionarios públicos se vean imposibilitados de proteger al pueblo.

Hoy es grato ver que los estudiantes universitarios en Venezuela son los abanderados en reclamar la libertad de expresión y de manifestar ardorosamente en contra de políticas y atropellos del gobierno, pero por varias décadas la educación primaria, media y universitaria estuvo básicamente regida por intelectuales de izquierda, quienes firmemente creen que el futuro de la nación depende de una cada vez mayor concentración del poder político y económico en manos de sus clarividentes líderes, de una ingeniería social impuesta por quienes sí saben lo que más conviene a las masas, mientras sienten un profundo desprecio por los conceptos de libertad individual, igualdad ante la ley, propiedad privada y el libre mercado.

En nuestros colegios y universidades se suele enseñar sobre las injusticias sociales ocurridas durante la Revolución Industrial, que fue justamente la primera vez en la historia universal cuando el ingreso per cápita comenzó a aumentar significativamente y cuando el nivel de vida de los obreros comenzaba a ser muy superior al de los trabajadores del campo. Esa curva ascendente del ingreso per cápita se hacía más perceptible en la medida que aumentaba el capital invertido, creciendo asimismo tanto la productividad como la demanda y, en consecuencia, los salarios y el bienestar de los trabajadores.

A mediano y largo plazo, la única manera de aumentar los salarios reales es a través de incrementos en la productividad de la mano de obra, lo cual se logra solamente con entrenamiento y mayores inversiones en maquinarias y equipos.

Ante el crecimiento de la demanda, el empresario evalúa constantemente si conviene más aumentar el número de trabajadores o invertir en maquinaria más sofisticadas. Si luego baja la demanda, la maquinaria puede ser utilizada por menos horas, mientras que en muchos países se dificulta o se hace inmensamente costoso despedir a un trabajador. Eso pareciera beneficiar a la clase obrera, pero bajo tales condiciones se crean muchos menos empleos porque los empresarios prefieren invertir en equipos y contratar menos personal.

Otra parte de esa tragedia es que las leyes laborales socialistas en la práctica imponen un matrimonio obligado entre patronos y los trabajadores, quienes entonces no saltan a mejores puestos en industrias emergentes y con gran futuro porque no quieren perder sus prestaciones y beneficios acumulados.

La globalización ha disparado el concepto de la "destrucción creativa" enunciado por Schumpeter en 1912, en la medida que las innovaciones que surgen de todas partes del mundo convierten en obsoletos, de la noche al día, a los inventarios, las ideas, las técnicas y los equipos. Si a esto le agregamos la inflexibilidad de perjudiciales leyes laborales, tenemos el fracaso asegurado.

Sin embargo, en América Latina seguimos bajo demagógicas leyes laborales que imponen altas indemnizaciones y demás beneficios contractuales, sean estos económicamente viables o no, a la vez que multiplican las regulaciones que aumentan los costos de operación, reducen la rentabilidad, incrementan la corrupción, disparan el crecimiento del sector informal, aumentan la disparidad de ingresos y ahuyentan nuevas inversiones. Esa es realmente la fórmula segura para el fracaso.

El éxito futuro depende del libre funcionamiento del mercado, a través de la oferta y la demanda, que permite el flujo de la indispensable información aportada por precios libres, que a su vez permite la óptima utilización de limitados recursos. Y al entonces concentrarnos en lo que comparativamente podemos producir más eficientemente, importando todo lo demás, avanzaríamos rápidamente hacia una mucho mayor y más generalizada prosperidad.

El mundo socialista y planificado es altamente retrógrado y conservador, en el sentido que le cierran la puerta a las innovaciones que, por definición, no pueden formar parte de un plan centralizado.

La influencia de nuestras constituciones

Nuestras constituciones socialistas han jugado un importante y negativo papel en América Latina. Aunque comenzamos la vida independiente bajo constituciones bastante parecidas a la de Estados Unidos, la cual, como dije antes, fue principalmente redactada para proteger al ciudadano de los abusos de los gobernantes, nuestras constituciones han sido reemplazadas por otras, crecientemente demagógicas y convertidas en verdaderas piñatas que supuestamente nos garantizan todos los derechos sociales imaginables. Eso en parte se debe a que son redactadas por políticos que jamás tuvieron la experiencia de verse obligados a sobrevivir en un mercado competitivo ni darle el frente al pago de una nómina salarial.

En 1961, la nueva constitución venezolana de corte claramente socialista introdujo una gran cantidad de los llamados "derechos sociales", tales como el derecho al trabajo, a la atención médica, a la vivienda, a salarios "justos", etc. El Artículo 99 describía la "función social" de la propiedad, mientras que los pocos artículos referentes a la libertad económica fueron suspendidos durante los siguientes 30 años de la vigencia de esa constitución.

De hecho, todas las constituciones venezolanas desde la de 1936 permiten la suspensión de derechos y garantías constitucionales en caso de "emergencia nacional", por lo que no nos

debe extrañar que nuestros gobernantes se acostumbraran a mantenernos en medio de alguna emergencia nacional para gobernar por decreto.

Otro frecuente problema constitucional latinoamericano es que cumplir con la letra de nuestras constituciones suele implicar una irremediable quiebra del Estado. Entonces, una importantísima función de los gobernantes y burócratas es decidir cómo repartir los premios y castigos entre diferentes grupos: sindicatos, la burocracia, los sin techo, campesinos, indígenas, ambientalistas, empresarios, dueños de medios de comunicación, banqueros, etc.

En Venezuela vamos por la constitución número 26, la cual está en proceso de ser cambiada por otra aún más socialista y que le permita a Chávez reelegirse de por vida, destruyendo definitivamente todo vestigio de equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los presidentes de Ecuador y Bolivia imitan a Chávez, quien a su vez avanza precipitadamente por el camino del miserablemente fracasado "socialismo o muerte" trazado por Fidel Castro en Cuba hace ya casi medio siglo.

Los salarios mínimos y las excesivas regulaciones producen desempleo y fomentan la informalidad; los altos impuestos del estado bienestar impiden el ahorro, mientras que los servicios públicos recibidos a cambio suelen ser deficientes; los controles de precios producen escasez; la politización del sistema monetario empobrece a la ciudadanía entera y fomenta la huída de capitales, mientras que la redistribución de la riqueza ha sido el mayor de los fraudes porque sólo los políticos y sus amigos se han beneficiado.

Culpando a otros

Nuestra clase política y nuestros intelectuales suelen culpar a Estados Unidos de los males que afectan a América Latina. Desde el fin de la Segunda Guerra hasta los años 80 prevaleció en gran parte de América Latina la llamada teoría de la dependencia promovida por la CEPAL y, especialmente, por su director desde 1948 hasta 1962, el economista argentino Raúl Presbich. Fue un abanderado del proteccionismo que definía al intercambio comercial como la explotación de los países pobres por parte de los países ricos, que nos exportaban productos manufacturados caros a cambio de materias primas baratas.

El supuesto remedio fue la sustitución de importaciones a través de la imposición de permisos, licencias de importación, altos aranceles y cuotas para proteger a la industria nacional que recibía abundante y barato financiamiento de los bancos estatales.

Claro que sin competencia extranjera, el mercado nacional tiende a la concentración y a los monopolios. Así vimos aparecer a millonarios mercantilistas que rápidamente se dieron cuenta que es mucho más fácil y remunerador convencer a un ministro o a unos pocos funcionarios encargados de fijar precios y repartir subsidios que a cientos de miles de consumidores empeñados en obtener óptima calidad a precios bajos.

Lo que trato de decir es que entre los peores enemigos del capitalismo en América Latina sobresalen nuestros pseudocapitalistas mercantilistas.

Los pseudocapitalistas

En los años 70 surgieron en Venezuela los llamados "12 apóstoles" del presidente Carlos Andrés Pérez, empresarios que gozaron de inmensos privilegios y jugosos monopolios. Su increíble habilidad se comprueba todavía hoy al ver a uno que otro de ellos enchufado con Hugo Chávez, por lo que un conocido escritor y editor venezolano afirma que "los 12 apóstoles de Carlos Andrés Pérez se han convertido en 40 ladrones de Hugo Chávez".

En el caso venezolano, pienso que varios de los peores ministros de Hacienda y Fomento que tuvimos en los años 70 y 80 fueron altos ejecutivos de importantes grupos empresariales que utilizaban descaradamente sus cargos para beneficiar a sus socios y jefes, quienes gozaron de privilegios especiales en la asignación de dólares durante el control de cambio, licencias de importación, subsidios y créditos baratos de los bancos estatales y de la Corporación Venezolana de Fomento.

Posteriormente, las llamadas políticas neoliberales de los años 90 frecuentemente le siguieron dando la espalda al libre mercado, desprestigiando la percepción del capitalismo en la mente del pueblo, ya que los monopolios y empresas estatales, que en México llegaron a ser más de 500, a menudo se convirtieron en monopolios y oligopolios privados que aunque mejoraron la calidad de bienes y servicios, también multiplicaron sus precios y tarifas, además de que procedieron a despedir a gran parte de la innecesaria burocracia de las viejas empresas del gobierno.

El símbolo del mercantilismo continental es probablemente el mexicano Carlos Slim. En abril, la revista Forbes colocó al Sr. Slim en el segundo lugar, entre la gente más rica del mundo, con una fortuna personal de más de 53 mil millones de dólares. Pero en junio, el medio financiero mexicano Sentido Común reportó que Slim había reemplazado a Bill Gates, como el hombre más rico del mundo, con 67 mil millones de dólares, agregando que Slim y su familia son dueños de "casi el 8% del producto interno bruto de México".

Sobre lo que no hay duda es que los mexicanos pagan las tarifas telefónicas más altas del continente y de todos los 30 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, lo cual le permitió al grupo Telmex, a partir del año 2000, su agresiva adquisición de empresas telefónicas por casi toda América Latina.

El llamado neoliberalismo latinoamericano hizo bastante daño y causó mucha confusión, mientras que en Estados Unidos la izquierda ya se había apoderado desde hace mucho tiempo del término "liberal", ilustre vocablo de origen castellano, que siempre fue el antónimo de "servil".

La definición del verdadero liberalismo no ha cambiado mucho desde el siglo XVIII: el individuo es la fuente de sus propios valores morales; el libre intercambio entre individuos optimiza la eficiencia y la libertad; el mercado es un orden espontáneo para el mejor uso de escasos recursos; el libre intercambio entre naciones maximiza la riqueza a través de la división internacional del trabajo, al mismo tiempo que reduce las tensiones políticas y la intolerancia nacionalista; las funciones del gobierno son estrictamente limitadas a lo que los individuos no pueden hacer por sí mismos, en cuanto a la defensa nacional, a mantener un Estado de Derecho para la protección de las personas y de sus propiedades, garantizando el cumplimiento de contratos libremente acordados, con leyes claras y constantes, aplicables a todos por igual, además de la emisión de una moneda estable y confiable que estimule el ahorro y el esfuerzo individual.

Para evitar confusiones, los clásico-liberales de hoy se suelen llamar libertarios.

¿Por qué crecen otros países?

Creo firmemente que el impresionante crecimiento económico que están logrando varios países ex comunistas se debe a su rápido avance hacia ese ideal libertario. Le escuché decir a Mart Laar, exitoso primer ministro de Estonia durante dos períodos, lo complacido que se sentía de haber comprobado que "las ideas de Milton Friedman sí funcionan". El Congreso chino reconoció este año el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada y Albania acaba de establecer una tasa única del impuesto sobre la renta de 10%, tanto a las personas naturales como a las empresas, al comprobarse que la reducción y unificación de la tasa impositiva ha conducido en varios otros países a aumentar considerablemente la recaudación total. Eso se debe a dos razones: se reduce drásticamente la evasión y se multiplican las inversiones.

Por cierto, que donde primero se instrumentó un impuesto de tasa única y pareja fue en Hong Kong, donde el ingreso per cápita equivalía en 1960 a 28% del de Gran Bretaña, pero para 1996 había aumentado a 136% del de Gran Bretaña, debido a las políticas de libre mercado instrumentadas por John Copperthwaite.

El despegue y éxito de la pequeña Estonia ha sido similarmente espectacular y su ex primer ministro Laar admite que él no es economista y que ha leído un solo libro de economía, "Libertad de elegir" de Milton Friedman, añadiendo "yo era tan ignorante que creía que los beneficios de la privatización, el impuesto de tasa única y la abolición de las barreras a las importaciones eran los resultados de reformas económicas practicadas en Occidente. Como eran de sentido común para mí, creía que habían sido instrumentadas en todas partes. Sencillamente las introduje en Estonia, a pesar de las advertencias de nuestros economistas de que no se podía hacer. Decían que era tan imposible como tratar de caminar sobre el agua. Lo hicimos y simplemente caminamos sobre el agua porque no sabíamos que era imposible".

En América Latina tenemos el estupendo ejemplo chileno, una nación tradicionalmente pobre que al liberar la economía logró disparar un crecimiento sostenido. En ese nuevo Chile surgió la revolución mundial de las pensiones, bajo el liderazgo de José Piñera, que ya se ha extendido a 8 países latinoamericanos, donde más de 50 millones de trabajadores cuentan con más de 100.000 millones de dólares ahorrados en cuentas individuales. Asimismo, varios países ex comunistas han privatizado sus sistemas de jubilaciones y, en este campo, Colombia y varias otras naciones latinoamericanas están ya por delante de Estados Unidos.

El fracaso de la ayuda externa

Lamentablemente, el gobierno de Estados Unidos nunca se ha preocupado en vender las ventajas capitalistas de libre comercio y libertad de empresa en América Latina. Por el contrario, desde tiempos de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, cualquier ayuda económica de Washington estaba sujeta a que los gobiernos latinoamericanos aumentaran los impuestos y a menudo trataban de imponernos reformas agrarias que ni siquiera Franklin Roosevelt consideró conveniente para su país.

En cualquier caso, miles de millones de dólares en ayuda extranjera no han cambiado nada en el mundo desde que comenzaron tales programas después de la Segunda Guerra. Como bien lo explicaba el más brillante economista del desarrollo, Peter Bauer: “El argumento que las donaciones externas son necesarias para el progreso de los países pobres confunde causa y efecto. Son los logros económicos los que producen activos y dinero; no son los activos y el dinero los que producen logros económicos…”

Ahora, en Estados Unidos se habla mucho de “nivelar el campo de juego”, con lo que algunos sindicatos y sectores industriales y agrícolas súper protegidos y poco competitivos aspiran seguir aprovechando actuales y futuras barreras a la importación. Nivelar el campo de juego en realidad significa aumentar el desempleo y la pobreza en América Latina.

Si Washington realmente creyera en las ventajas del capitalismo, el representante de Estados Unidos abriera las hasta ahora exageradamente largas y complejas negociaciones de los tratados bilaterales de libre comercio, diciendo lo siguiente: “Lo que claramente conviene más a los norteamericanos es poder comprar los mejores productos y servicios del mundo, al precio más bajo posible, por lo que procederemos a eliminar cualquier traba o barrera a la libre importación de productos y servicios provenientes de su país. Y en beneficio de su propia gente, les sugerimos, aunque en ningún momento le trataríamos de imponer, que ustedes hagan exactamente lo mismo. Entonces, finalizada la negociación, procedamos con el brindis”.

Conclusión

En América Latina, muchos de nuestros gobernantes y políticos siguen luchando contra enemigos imaginarios. Antes se culpaba al imperialismo yanqui que supuestamente nos obligaba a intercambiar materias primas baratas por productos manufacturados caros, hoy es la globalización, los subsidios agrícolas de los países ricos y las "asimetrías".

En cuanto a los subsidios agrícolas, si estos, por ejemplo, permiten a latinoamericanos comprar pan más barato porque es elaborado con trigo subsidiado por los contribuyentes norteamericanos, ello debería ser más bien aplaudido y apoyado por quienes pretenden defender a los pobres de su país.

El tema de las asimetrías es todavía más absurdo. Equivale a decir que si un hombre rico, manejando su Rolls-Royce, se para en un semáforo y le compra una caja de chicles a un jovencito en alpargatas, se aprovecha y perjudica a ese muchachito.

Así como los dictadores del siglo XX nos decían que los latinoamericanos no estábamos listos para la democracia, los políticos de hoy insisten que no estamos listos para la libertad económica.

El problema latinoamericano es profundo y difícil de combatir porque las principales trabas al bienestar y a la prosperidad forman parte de nuestras instituciones: nuestros gobiernos, nuestras leyes y constituciones, nuestros sistemas judiciales politizados y una educación pública que a lo largo de varias generaciones ha deformado la manera de pensar de la ciudadanía. Lejos de promover la responsabilidad individual, la propaganda política en la educación pública enseña a los niños que el gobierno es el tío rico y bondadoso que siempre estará allí para ayudarles, cuidarlos y hacer posible su felicidad. El problema, claro está, es que el gobierno sólo puede darme a mí lo que antes le quitó a usted.

Discurso pronunciado ante la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia el 03 de agosto de 2007 en Bogotá.

Tomado de Instituto Cato (elcato.org).

la ventana ROTA